

BRASIL

TEMA DEL MES

GIGANTE EN LA ENCRUCIJADA

ADemás

México en la perspectiva del nuevo gobierno

Suplemento informativo de *La Jornada*
15 de septiembre de 2018 • Número 1312 • Año XI

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra
Coordinador

Cecilia Navarro
lajornadadelcampo.edicion@gmail.com
Subcoordinadora

Enrique Pérez S.
Hernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Publicidad
jornadadelcampo@gmail.com

Diseño Hernán García Crespo **CAJA**
TIPOGRÁFICA

La Jornada del Campo, suplemento mensual de *La Jornada*, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título *La Jornada del Campo* número 04-2008-121817381700-107.



PORTADA: Francisco Proner®

COEDITORAS DE ESTE NÚMERO:

Rosalinda Hidalgo
y Mónica Montalvo



Auditorio Emiliano Zapata, San Salvador Atenco, México.

FOTO: Sari Dennise

Para salir del túnel:

CAMBIO DE PARADIGMAS, INICIATIVAS SOCIALES, REFUNDACIÓN PARTIDISTA

El vuelco del primero de julio promete muchas cosas, entre otras, que no se repitan Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochistlán..., lo que ya sería bastante. Pero en lo que toca al curso socioeconómico, la tarea central es escapar del torrente neoliberal al que nos empujaron hace 35 años y que nos arrastra al abismo.

No tiene caso hacer de nuevo el recuento de los daños, baste decir que de un crecimiento del producto interno bruto per cápita, que después de la segunda guerra mundial se había movido en torno a un 7% anual y aun en el declive había llegado al 3.1%, con Luis Echeverría, y al 4.3%, con José López Portillo, durante la primera administración tecnocrática, que fue la de Miguel de la Madrid, pasamos a un decrecimiento de casi 1%, mientras que en el lapso que va de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, en ningún sexenio el incremento llegó a 2% y para el conjunto el promedio fue de 1%. Así las cosas, desde la firma del TLCAN y hasta la crisis recesiva global de 2009, la salida de mexicanos a EU se vuelve estampida: un promedio de medio millón cada año; mientras que la importación de alimentos se incrementa hasta llegar al 50% de lo que consumimos. Y luego el narco y la guerra contra el narco. Un desastre.

Entonces de lo que se trata no es de cambiar -de un día para otro- el modo de producción sino de cambiar -de inmediato- el modo de conducción. Pasar de gobiernos omisos, desafanados y corruptos, cuyo activismo se redujo a tomar las medidas (aper-

tura comercial, desregulación económica, desmantelamiento de las instituciones de fomento...) que les permitieran desembarazarse de su responsabilidad constitucional con la soberanía y la planeación democrática del desarrollo, a un gobierno probo, activo y enérgico que en lo externo defienda los intereses nacionales y en lo interno impulse el crecimiento sostenible y la distribución equitativa del ingreso. En breve: un gobierno posneoliberal.

Ahora bien, casi cuatro décadas de libre-cambismo transformaron profundamente al país y hoy la razón neoliberal impregna todas nuestras instituciones; se modificaron la Constitución y otras leyes, y se adecuaron a ella los aparatos del Estado, sus instancias, sus políticas y sus reglas de operación; pero también se reconfiguró nuestra estructura productiva, de modo que hoy tenemos una economía severamente extranjerizada. (aunque no "extractivista" y "primario exportadora", como dicen los que repiten fórmulas de moda, sino básicamente maquiladora; lo que es peor, pues lo que sacrificamos en las aras del gran capital transnacional no son tanto riquezas naturales como plusvalía: el sudor y la sangre de nuestros sobreexplotados trabajadores).

El neoliberalismo estructural que hoy conforma nuestras instituciones y nuestra economía tendrá que ser desmontado paulatina y progresivamente pues las leyes no se cambian por decreto, los aparatos de Estado son resistentes a las mudanzas y el sistema productivo responde a intereses poderosos que no se pueden soslayar y está sujeto a las

inercias del mercado. El enfoque, en cambio, es asunto de voluntad; una decisión política que se puede -y se debe- tomar ya.

Otros principios, otros valores. Lo que hay que cambiar sin dilación es el paradigma; sustituir de inmediato los supuestos básicos del neoliberalismo por los principios, conceptos y valores que en adelante deberán guiar los trabajos de gobierno y sociedad. Un nuevo modo de ver las cosas y de proyectar el futuro; un modelo opuesto al neoliberal, que puede leerse en los 50 objetivos del Proyecto de nación 2018-2024, de los cuales la mitad son de carácter económico. Resumen brevemente la propuesta en seis conceptos contrastantes con el dogma librecambista:

Primero los pobres (objetivos 3, 38, 39, 41, 42), concretado en la redistribución progresiva del ingreso mediante aumento al salario mínimo y a las remuneraciones de los trabajadores de base al servicio del Estado, pero también mediante la cobertura universal de los servicios básicos, el apoyo a las madres solteras, a los jóvenes, a los viejos... Para el neoliberalismo, en cambio, primero van los ricos, pues -dicen- si arriba se crea y acumula riqueza, ésta gotea y llega a los de abajo.

Primero el sur (objetivos 17, 19, 21), concretado en programas de desarrollo para la región, en el rescate del campo y de la economía campesina, y en el proyecto de sembrar un millón de hectáreas con árboles, unos frutales y otros maderables. Para el neoliberalismo, en cambio, primero va el norte -volcado hacia los EUA-, pues el rumbo →

BUZÓN DEL CAMPO

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a
jornadadelcampo@gmail.com

twitter.com/jornadadelcampo
[facebook.com/La Jornada del Campo](https://facebook.com/LaJornadaDelCampo)
issuu.com/la_jornada_del_campo

→ del desarrollo lo fijan el mercado y las ventajas comparativas.

Soberanía alimentaria (objetivos 19, 20, 21, 22), concretado en políticas de rescate al agro, privilegiando la producción campesina, la ganadería y la pesca, y favoreciendo las prácticas agroecológicas. Para el neoliberalismo, en cambio, el país no tiene vocación cerealera, de modo que es más rentable importar granos básicos que producirlos.

Soberanía energética (objetivos 4, 23, 24, 25), concretado en reversión o cuando menos revisión de los contratos derivados de las reformas estructurales, rehabilitación y construcción de refinerías, impulso a las hidroeléctricas. Para el neoliberalismo lo más conveniente es privatizar las paraestatales del ramo e integrarnos a la estrategia energética estadounidense exportando petróleo e importando combustibles.

Soberanía laboral (objetivos 17, 21, 28, 29, 30), concretado en cumplir la obligación constitucional de generar empleos estables y remunerativos mediante el apoyo a la pequeña y mediana empresa y a través de programas regionales que retengan población local que de otra manera migra, entre ellos el millón de hectáreas reforestadas y las obras de infraestructura. Para el neoliberalismo el desempleo, subempleo y empleo precario que propician bajos salarios es lo que nos hace competitivos, y exportar campesinos al tiempo que se importan alimentos es un buen negocio para el país.

Recuperar al Estado como impulsor del desarrollo (objetivos 1, 13, 35), concretado en erradicar la corrupción, la simulación y el dispendio, para -así saneadas- restituirle a las instituciones públicas su función constitucional de inducir y conducir el crecimiento, garantizando que este sea integral, incluyente, justo y sustentable. Para el neoliberalismo el Estado debe ser mínimo y estar al servicio del mercado y sus usuarios corporativos, lo que incluye la prevaricación como palanca privilegiada de acumulación.

Cambio de rumbo que para concretarse necesita iniciativas renovadoras provenientes de una también cambiante sociedad organizada capaz de transitar de la protesta a la propuesta.

Café. Hace un mes mencioné aquí los planteos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOOC) que escuché en su Foro Nacional realizado en Oaxaca. Semanas después, estuve presente en la aún más amplia exposición que le presenté a los futuros secretarios de agricultura y bienestar, la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé), que representa no solo a los productores primarios, sino a todos los actores del sistema producto. Evento plural, incluyente y ejemplar, resultado de una convergencia estratégica de la que forman parte desde grandes empresarios agroindustriales hasta caficultores indígenas de media hectárea. De que se puede, se puede.

Y relanzar la caficultura mexicana es importantísimo porque -como ahí se dijo- la del



Un jornalero corta bayas de café en una finca de Coatepec, Veracruz.

grano aromático es una actividad que RETIENE. Al generar empleo e ingreso, *retiene campesinos*, que de otro modo marcharían a las ciudades; al desarrollarse mayormente en plantaciones bajo sombra *retiene carbono* y ayuda a reducir emisiones de gases de efecto invernadero; al ser arbórea y de montaña *retiene agua y tierra*, evitando deslaves, azolve de ríos y catastróficas inundaciones; al ser con frecuencia un policultivo orgánico en el que no se emplean agroquímicos, preserva y *retiene la diversidad biológica*; al ser superavitaria su balanza externa, el café *retiene divisas* que se perderían si dejamos que se desplome la producción y aumenten más las importaciones.

NAICM. Me referí también al nuevo aeropuerto. Tema al que regreso. Lo primero es reiterar que por razones sociales, ambientales, técnicas y económicas el NAICM no debió hacerse en Texcoco. Pero el hecho es que no pudimos impedirlo a tiempo y se está haciendo ahí, con un avance de más del 30%, lo que significa que una parte del impacto socio ambiental y económico es ya irreversible. Por otro lado, hoy sabemos de cierto que la opción de Santa Cecilia presenta limitaciones aeronáuticas; y también es verdad que el actual campo aéreo está cada vez más peligrosamente saturado. O sea que -como dijo López Obrador- habrá que valorarlo todo fríamente e irse por la solución menos mala... Que incluso puede ser Texcoco. Pero es claro que cualquiera que sea la decisión, tendrá altos costos.

Hay, sin embargo, un daño gravísimo que sí estamos a tiempo de impedir: el catastrófico deterioro socioambiental del entorno -y a la larga de toda la cuenca- que resultaría de la mega-urbe que planean Carlos Slim y sus compinches. Y para ello -con o sin NAICM en Texcoco- habría que ponerle una veda a la especulación con tierras en la zona, prohibiendo todos los desarrollos inmobiliarios agresivos. Esto acompañado de un energético programa de desarrollo socio ambiental que restaure la actividad agropecuaria y en general la vida campesina de la cuenca.

Una ruralidad que hoy está en franca decadencia. Y no solo por los impactos de lo que va del aeropuerto. Pues hay que reconocer que las cosas ya iban mal en esos pueblos, cuando muchos ejidatarios vendieron o están dispuestos a vender la tierra, pocos jóvenes le tienen apego a la agricultura y no

falta quien rente su parcela para jugar fútbol los domingos, porque le conviene más que sembrarla.

Así como están las cosas, pienso que un aeropuerto redimensionado, con medidas de mitigación y acompañado de energéticos programas regionales de desarrollo socioambiental, puede ser compatible con la preservación de la ruralidad en la cuenca. En cambio, si no se restaura en la región la vida campesina y no se frena la especulación inmobiliaria que de todos modos ya está en curso, el eventual triunfo del no al aeropuerto solo haría un poco más lento un deterioro que empezó hace mucho y tiene que ver con la hasta ahora irrefrenable expansión de la metrópoli.

El nuevo Príncipe. Gobierno de cambio y multiplicación de las iniciativas sociales son indispensables para rescatar a la nación de la decadencia. Pero no son suficientes, hacen falta también partidos; organismos políticos que medien entre los intereses particulares de la sociedad organizada gremialmente y la perspectiva general y nacional que le corresponde al gobierno. Porque las prioridades de los gremios y las del gobierno son de distinto orden: los primeros gestionan cuestiones parciales y el segundo gestiona el conjunto de la nación. Y cuando no hay mediaciones políticas entre Estado y sociedad, la confrontación es mutuamente desgastante: una dialéctica de reclamos-concesiones cuyo balance depende de la siempre cambiante correlación de fuerzas y que inevitablemente propicia reflejos clientelares ("maicear" para controlar) y corporativos (hacer política directamente desde los gremios).

La mediación entre el Estado y la sociedad organizada por sectores, son los partidos, que estando insertos en la organización y las luchas parciales y locales, tienen también un proyecto de país; una visión nacional y estratégica que les permite fusionar lo particular y lo general. Su ámbito natural es el poder legislativo, pero ciertamente no es el único.

Y si en México hay que refundar el Estado colapsado y reorganizar a la sociedad deshilvanada, de plano hay que inventar a los partidos, pues los viejos institutos desde hace rato no lo eran, además de que después del primero de julio entraron en crisis. Alguno quizá terminal.

Está Morena, claro, un portentoso organismo ciudadano que en menos de cuatro años acabó más de tres millones de militantes y ganó de calle la elección. Pero aunque se llame partido-movimiento, hoy Morena es un partido electoral y no de lucha social. Y si bien en el reciente Congreso se acordó darle continuidad a los mandos, sin duda el organismo ha entrado en terrenos inciertos. Por una parte está el hecho de que muchos de sus cuadros se están volcando a la función pública, pero lo más desafiante es que Morena tiene que redefinir su papel y encontrar su lugar en el nuevo escenario.

Pienso que, después de las elecciones, el lugar de Morena es -ahora sí- volverse movimiento sin dejar de ser partido. Incorporarse decididamente a la lucha social, no para jalar votos ni para vigilar desde abajo que el gobierno no se desvíe, sino ayudando a las ingentes tareas de organización, movilización y también vigilancia crítica que supone el cambio de ruta. Porque en la perspectiva de su política sindical, de su política campesina, de su política estudiantil... los partidos pueden y deben participar en los gremios, que es lo que les permite ser mediadores entre la sociedad y el Estado.

¿Podrá Morena? Si en menos de cuatro años ese partido pudo construirse como maquinaria electoral y ganar las elecciones de julio, creo que también podrá con el nuevo desafío. Pero ahora tendrá que hacerlo sin López Obrador. Lo que es muy bueno.

Indispensable para la regeneración, no de la Italia del siglo XVI sino del México del siglo XXI, nuestro "Príncipe nuevo" comenzó a surgir hace unos quince años. Primero fue maquiavelano: un líder carismático como lo demandaba la estrategia electoral. Pero ahora que aquel príncipe gobierna, el nuevo príncipe deberá ser estrictamente gramsciano: una instancia colectiva de nuevo tipo a la vez parlamentaria y extraparlamentaria: un partido movimiento... Habrá que verlo.

A. Martha

Brasil está con Lula encarcelado

En menos de un mes habrá elecciones en el gigante del Cono Sur y el hombre que tiene el 40% de las preferencias electorales ha sido llevado a prisión para que no pueda ser candidato (y nosotros sabemos de eso porque tuvimos el desafuero). Los inminentes comicios son decisivos, no solo para ese país, sino para todo el subcontinente, porque si al ingreso de México a la vertiente de gobiernos progresistas se sumará el regreso de Brasil y tarde o temprano la recuperación de Argentina, la izquierda estaría de nuevo al alza en un proceso de cambio que por operarse con pluralismo político electoral está inevitablemente sujeto a fluctuaciones. Ojalá.

Generar un estado de bienestar, la gran tarea por venir: Boltvinik

Cecilia Navarro

En este texto, Julio Boltvinik, académico y uno de los mayores especialistas en el estudio de la pobreza en nuestro país, desgrana, analiza diversos temas de política pública de los que necesariamente se deberá ocupar la administración que arranca el 1 de diciembre. Aciertos, desconfianzas, miopías, de todo un poco en lo que apenas son esbozos de la llamada cuarta transformación.

“Erradicar la pobreza no es asunto de una secretaria. Es absurdo pensar así. Tampoco se puede reducir a decir que todo es corrupción y se soluciona con austeridad. Para erradicar la pobreza se requiere una propuesta completa y estructurada. Morena ya cuenta con ella, pues la elaboramos hace algunos años”, dice Julio Boltvinik en entrevista con *La jornada del campo*.

El objetivo de esa propuesta es, o debería ser, el bienestar de todos, el florecimiento humano y la vida plena. Coincide con el anuncio de que la secretaria de desarrollo social se va a llamar la secretaria de bienestar, explica Boltvinik y agrega que para el campo y sus habitantes el objetivo es el mismo, aunque con particularidades.

“Para la vida plena necesitamos recursos y desarrollo económico. Para esto se necesita la articulación virtuosa de las políticas económicas, sociales y culturales. La articulación virtuosa es lo opuesto de lo que vivimos hoy, que es una subordinación total de lo sociocultural a lo económico. Así ha sido estos años y así es el discurso de Andrés Manuel, que no quiere cobrar impuestos. Es decir, va a sujetar lo social al dinero que haya. Lo único que va a llegar de más son los ahorros derivados de la austeridad, pero no de cobrarles más impuestos a los ricos”.

Entonces, ¿cómo es el estado de bienestar?

“El Estado de bienestar procura la articulación virtuosa entre política económica y política social en la que las dos tengan el mismo objetivo de bienestar, mediante un nuevo modelo económico, desmercantilizador y desenajante, que busque una ecología sustentable y la disminución de la desigualdad”.

“Hoy la economía es fábrica de pobres y la política social les da paliativos para que no haya estallidos sociales. Esa es la articulación actual. El Estado de bienestar quedaría armado por la administración pública en su conjunto, no solo por los sectores sociales. Habría que cambiar los mecanismos de comunicación interestatal y con el sector privado. El papel de las secretarías de hacienda y de economía sería central”.

“En el campo es necesario recuperar el Estado de bienestar agrario. Este es un concepto que se ha usado muy poco en el mundo, de un autor iraní llamado Farshad Araghi. Este Estado considera semillas subsidiadas, fertilizantes subsidiados, riego prácticamente gratuito, investigación agrícola, precios de garantía, etcétera. Ese modelo que predominó en México hasta antes de la revolución neoliberal, operaba en todo el tercer mundo y se dismanteló simultáneamente para dar lugar a las fuerzas del mercado, porque era totalmente estatista”.

¿Y es así el cambio que plantea Andrés Manuel?

“Sí y no. Está detrás de muchas cosas que anuncia, pero no es receptivo a esto porque es demasiado radical. No sé si el Estado de bienestar se vaya a perfilar para el sector agricultura, ahí siempre ha predominado el objetivo productivista que se asocia, equivocadamente, con los medianos y grandes productores. Es complicado para el secretario de agricultura cuidar la productividad de los grandes y recuperar la economía campesina al mismo tiempo”.

“El discurso de Andrés Manuel apunta a más Estado -en cuanto el dinero lo permita-, cero privatizaciones nuevas, pero no reversión de las anteriores. También busca

un poder ejecutivo centralizado y muy fuerte, que tiene ventajas y desventajas”.

Pero a AMLO el campo sí le interesa... habla de recuperar la soberanía, de precios de garantía...

“AMLO ha dicho muchas cosas. Por eso digo que sí y no. AMLO siempre habla de conceptualizaciones concretas, no de teorías, no le da para eso. Y políticamente a lo mejor está bien, el discurso político es más fácil si dices cosas concretas. Ha hablado sobre precios de garantía, de recuperar

un millón de hectáreas de árboles frutales. Refleja el ánimo de que la gente tenga ingresos. Igual que su programa de jóvenes. Refleja la misma voluntad. Pero los dos están diseñados con las patas. Tienen buena intención, pero ninguno está problematizado. Las grandes empresas y las cooperativas exitosas, como las de la Universidad Mondragón en el País Vasco, lo son por su tecnología moderna. El programa de aprendices va a poner a los jóvenes a usar tecnología de la edad media”.

¿Cómo recuperamos el Estado de bienestar agrario?

“Hay que recuperar los apoyos a la producción y a la comercialización que se tenían en el Estado de bienestar agrario. La vía era no darle dinero a la gente, la gente tenía la tierra. Había que darles crédito, apoyarlos con precios de garantía, fertilizantes, semillas e investigación agrónoma constante”.

Y está el tema de ¿cómo vamos a erradicar la pobreza y la desigualdad?

“Para disminuir la desigualdad y erradicar la pobreza se tienen que encontrar todas las variables que determinan la situación económica en personas y en hogares: el ingreso corriente, monetario y no monetario; los activos básicos, vivienda y equipamiento y en el caso de los campesinos, la tierra; los activos no básicos, es decir, propiedades líquidas y capacidad de endeudamiento; acceso a bienes

y servicios gratuitos o altamente subsidiados. Cuando los derechos son universales, todos tenemos esa titularidad y accedemos, por ejemplo, a la educación pública gratuita, que es el gran éxito de los gobiernos postrevolucionarios. Se llama el salario social. Salario normal más activos básicos y no básicos. Otro punto son conocimientos y capacidades. El último punto es el tiempo libre y el disponible para el trabajo doméstico y la educación. Hay que tomar estas seis fuentes de bienestar y decir qué política se requiere para aumentarlas en los hogares”.

“También está el tema del salario mínimo. ¿Qué hacemos para mejorar el ingreso? Poner en marcha un programa de recuperación del salario mínimo y los salarios públicos. Alrededor del 70% del ingreso de los hogares de México son salarios. Después vienen otros ingresos: trabajo por cuenta propia, remesas, ayudas familiares, pero el salario es la espina dorsal del ingreso familiar. Todos somos asalariados, o casi todos”.

“Otra vertiente es aumentar los activos básicos y no básicos. La vivienda es el activo básico más importante y un derecho social de las familias. En el campo es la tierra. Otro activo básico es la capacidad de endeudamiento a tasas bajas. Los pobres se han podido endeudar siempre a tasas explotadoras. Cuando eres pobre cualquier fluctuación te puede matar, pues sólo acceden a instituciones con créditos usureros”.



Dr. Julio Boltvinik Kalinka.

→ ¿Cómo recuperar esa capacidad de endeudamiento que no te asfixia?

“Una de las consecuencias más dramáticas del desmantelamiento del Estado de bienestar agrario fue que se redujeron los bancos públicos de crédito que prestaban a los campesinos a tasas de interés subsidiadas. Tenían esa capacidad de endeudarse para aumentar su capacidad de producción. Si no puedes endeudarte no puedes comprar semillas y otros insumos, tus rendimientos son bajos y pasan muchas cosas. Esto es válido para toda la población pobre”.

“Esta es una cosa que los neoliberales sí hicieron bien, mejoraron el sistema financiero. Ahora tú y yo podemos obtener una hipoteca para comprar o mejorar una casa. Hace 30 o 40 años yo no podía. conseguir una hipoteca es relativamente fácil si tienes un ingreso estable. Hicieron funcionar el mercado, pero esto aún no llega a los estratos populares”.

“Para erradicar la pobreza campesina en el mundo se requieren subsidios. Porque son millones de productores haciendo lo mismo. La venta de los productos de su milpa no los saca de la pobreza, les da un ingreso adicional”.

“Después viene el acceso a bienes y servicios gratuitos o altamente subsidiados. Este es el salario social. Somos derechohabientes, no mendigos. Parte del derecho social a una vida digna sintetiza y engloba todos los derechos sociales. Esto derrotó al clientelismo, son derechos garantizados. Esto significa que todos somos ciudadanos de primera. Por ejemplo, los servicios de salud están sumamente estratificados. Pero si todos somos de primera no se pueden plantear soluciones como el seguro popular. Se tienen que plantear cosas correctas, que cubran las necesidades a un nivel austero, pero digno”.

“También es importante revigorizar las políticas de abasto público. No se trata de un programa único, sino de una red de programas que cubrirían todos los sectores económicos en los siguientes aspectos: promoción, asistencia técnica, crédito para capital de trabajo y para inversión a bajas tasas de interés y apoyos a la comercialización. Ese es el tema que supuestamente va a llevar a cabo María Luisa Albores, aunque no ha dicho nada claro, la verdad”.

“Luego vienen conocimientos y capacidades. Este punto es un fin en sí mismo para la obtención de ingresos. Morena propone la mejora de capacidades socialmente relevantes. Este es un discurso radical. Más allá de la educación formal, Morena propone una amplia política sociocultural orientada a las capacidades socialmente relevantes que permitan la superación

de su pobreza. Este enfoque rechaza la posición de que la educación sólo ocurre en las dos primeras décadas de la vida. Desarrollo no es crecimiento del PIB, es desarrollo de las capacidades y necesidades de la población. México se desarrolló de los 30 a finales de los 70 porque desarrolló sus capacidades. La gente se preparaba, había un ambiente que fomentaba el desarrollo de las capacidades humanas. Y después llegó la idea de que el capital extranjero era la solución. No puedes planificar si crees que el mercado lo resuelve todo”.

“En ese tema, Andrés Manuel es intervencionista. A él le gusta un Estado que actúe e intervenga, que el Estado pague. Y cuidado, porque esto puede ser una tragedia en el caso del programa de los aprendices”.

¿Por qué?

“Porque va a pagar como 110,000 millones de pesos anuales. Eso es 60% más de lo que se da a Progres. Y puede ser un fracaso total. Por eso los empresarios están tan contentos, se les va a pagar el sueldo a sus empleados. Van a recibir a los jóvenes y van a correr a los que tenían. Va haber un conflicto intergeneracional brutal. El hijo reemplazará al padre, con un salario de miseria. No llega al salario mínimo profesional. Es algo muy delicado, lo están anunciando sin preparación. No se vale lanzar programas enormes sin un diseño cuidadoso. Prospera se diseñó en Campeche por dos años. Y aunque no le fue tan bien, no fue un desastre, la gente está recibiendo el dinero y los niños están yendo a la escuela”.

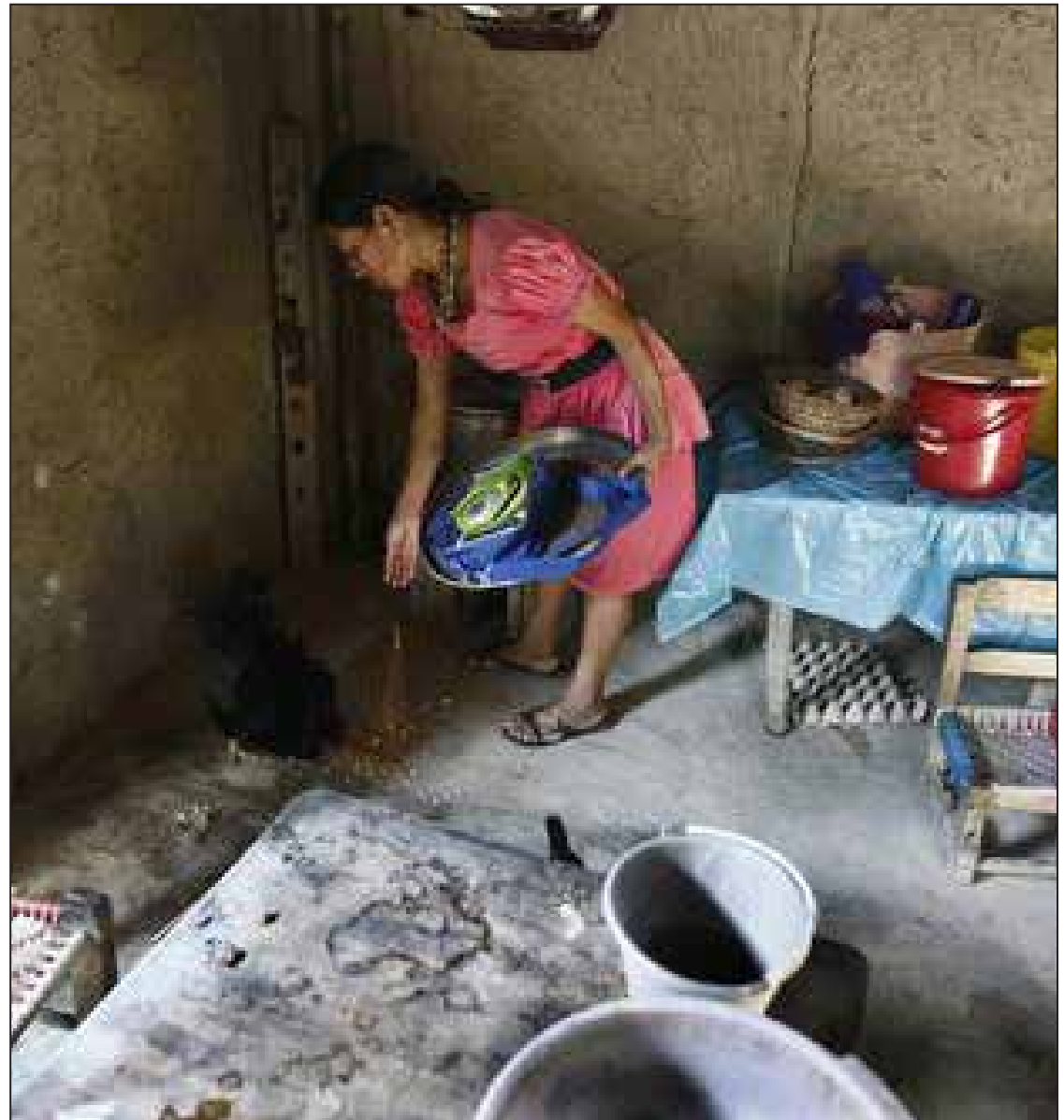
“Esto va a ser una farsa y lo que pasará es que los jóvenes trabajarán como obreros y desplazarán a las generaciones más antiguas. Es ridículo, no hay ningún costo para los empresarios. En estos trabajos no se requiere la capacitación, o si se requiere es muy menor, es una cosa de semanas”.

¿Entonces AMLO no es un planificador? ¿Nada más sale con ocurrencias?

“Es un iniciador de ideas. Eso es importante. Por eso es presidente de la república. Eso no era parte de la ortodoxia de su tiempo, las ideas de su tiempo eran darle dinero a la gente solo si era pobre”.

Por eso usted reitera en sus artículos dice que sería importante dialogar. ¿Esto se va a dar?

“No veo ningún paso para que suceda. Desde luego, AMLO platica con científicos que son de su círculo. A veces lo convencen, pero debería de oírlos más. No nos gusta que improvise. Él dice que dialoga con la gente porque es sabia. Nosotros también somos



La pobreza no se mide sólo por el ingreso económico.

FOTO: Cristina Rodríguez / La Jornada

gente y nuestra sabiduría la hemos cultivado, probablemente sabemos un poco más. Claro que estoy de acuerdo con él de que hay que platicar con los campesinos nos da mucha información, pero no es suficiente”.

También la educación como está ahonda la brecha de desigualdad...

“En cuanto a esta desigualdad es importante hacer universal la educación preescolar de alta calidad. El preescolar da una gran ventaja en la primaria sobre los niños que no lo cursaron. Legalmente es imposible entrar a primaria sin educación preescolar, pero como no hay cobertura universal hay 6 millones de niños en edad preescolar que no asisten a clases. Y sufren abandono durante las horas laborales. Esto es terrible porque llegan a la escuela con muy pocas capacidades, incluso de control corporal”.

“Otro punto importante es que la primaria y el preescolar duren hasta las 4 de la tarde. La educación básica funge como guardería mientras los dos padres están trabajando. En los países anglosajones los horarios están sincronizados entre lo laboral y lo escolar. Aquí los niños salen al medio día y los padres a las seis de la tarde”.

¿Y en términos de política fiscal? La próxima administración se limita a decir que no habrá más impuestos, pero los impuestos tam-

bién pueden ahondar o combatir la desigualdad...

“Hay un problema ahí. No es posible que Morena no tenga un planteamiento claro para eso. Tenemos los impuestos sobre la renta, al valor agregado. El IVA puede ser un impuesto altamente redistributivo si se manejan tasas múltiples. Desde IVA negativo, para la tortilla por ejemplo, hasta tasas de 35% para bienes de súper lujo que sólo los ricos consumen. Control de precios con base social. Esto implica restablecer el control de precios y tarifas en algunos bienes y servicios básicos.

Trabajar en México

México es el país OCDE con más horas de trabajo. Las prestaciones desaparecieron. Y los empresarios que pagan el seguro social a sus empleados, lo hacen con el salario mínimo. Esto es tremendo, cuando los pensionen, será un ingreso mínimo. ¿Cómo llegamos a esto?

Y no sólo eso. Si se accidentan quedan incapacitados con muy poco dinero. El salario es crucial para el trabajador, pero llegan a tratos usueros con el empleador, donde pareciera que reciben un beneficio al registrarlos con un salario mínimo al seguro popular cuando perciben dos o tres salarios mínimos o más. Aquí hay una vergüenza terrible. El sector público se ha convertido en uno de los principales violadores de

la ley del trabajo. Contrata millones de personas sin prestaciones de ley. Les paga por honorarios, los despide cuando quiere, no tienen aguinaldo, vacaciones, seguro social, es un espanto. También sucede en el gobierno de la Ciudad de México, no solo en el federal. Esto se debe corregir.

¿Deben seguir los programas asistenciales?

“Las transferencias monetarias públicas a nivel federal son parte crucial de los programas y Prospera es el más grande. ¿Qué propongo? Que dejen de ser condicionadas y focalizadas a nivel de hogares individuales. Con condicionadas me refiero a “te doy el dinero siempre y cuando mandes al niño a la escuela, vayas a la clínica. Si dejas de hacerlo se suspende el pago”. La transferencia está condicionada a cierta conducta. La propuesta es quitar estas condicionantes. Las familias siempre quieren mandar a su hijo a la escuela. La beca educativa debe universalizarse a todos los estudiantes de escuelas públicas desde preescolar hasta preparatoria mediante una ley específica”.

Hay que dejar de focalizar los programas sociales; universalizar la beca a estudiantes de escuelas públicas; aumentar sustancialmente el alcance de Prospera; ampliar el ingreso monetario para adultos mayores y madres solteras. Es decir, garantizar el ingreso ciudadano universal. 🍌

Vigilar que las dependencias prioricen el combate a la pobreza, la verdadera tarea de Sedesol: De la Torre

Rodolfo de la Torre, especialista en desarrollo social, platicó con *La jornada del campo* sobre el viraje que debe dar la política social en el contexto del cambio de administración. Hasta ahora, la política de desarrollo social ha girado en torno de programas asistencialistas que no han logrado disminuir la desigualdad y la pobreza. ¿Cuáles son los pasos que la nueva administración debe dar para transformar esa situación, especialmente en el mundo rural?

En lo que se refiere a dónde estamos ahora, De la Torre comenta: “En los pasados 25 años no ha habido un crecimiento de los ingresos de las familias en general y particularmente en las zonas rurales. La desigualdad con la cual se distribuye ese ingreso es constante. Parte de esa desigualdad está dada por las diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas. Entre la población dedicada a labores agrícolas hay menores ingresos, con respecto a las zonas urbanas. En cuanto a la pobreza, tenemos una historia similar: si bien ha habido algunos progresos, en el largo plazo prácticamente los niveles de pobreza han permanecido constantes y son más agudos en las zonas rurales. Ha habido un cambio importante, hoy hay mayor población en las ciudades, y ahora la pobreza es urbana, pero eso no quiere decir que la pobreza rural sea menos importante, al contrario, sigue siendo más aguda. Éste es el panorama general”.

Los pequeños campesinos ven que la Sagarpa es la secretaría de los grandes productores, en tanto que la Sedesol es la secretaría de los pobres. Piden que esto cambie. ¿Cómo debería darse este cambio? ¿A qué tendría que enfocarse la Sedesol (próximamente, secretaría de bienestar) para dejar de ser la que da recursos a las personas en pobreza para que sigan en esa condición?

“Sí, algo de razón tienen, los subsidios al campo importantes como Procampo se han concentrado en productores con grandes extensiones de tierra. No se ha implementado una política estricta para limitar los subsidios a los grandes propietarios, y termina siendo un esquema donde Sagarpa da recursos en mayor medida a los que no los necesitan y Sedesol, que opera pocos programas, no tiene la fuerza institucional para guiar las decisiones de otras secretarías, llámese salud,



Rodolfo de la Torre.

educación o agricultura, para atender prioritariamente a las personas más pobres y tiene que hacerlo con sus propios recursos y proyectos, que son limitados. En el futuro se tienen que revisar los subsidios al campo para que se redistribuyan a los productores más pequeños y sobre todo en el sur del país y Sedesol, más que operar programas específicos, tiene que tener fuerza institucional para cambiar la dirección de las políticas de otras secretarías, como salud, educación y Sagarpa”.

¿Hacia dónde orientar el trabajo de la Sedesol?

“Sedesol, en papel, está a la par de las otras secretarías. Sin embargo, se le asigna la coordinación del gabinete social y esto significa dirigir en las otras secretarías la atención a los grupos más pobres. Pero en los hechos no tiene la fuerza para que hagan caso a sus indicaciones. Eso tiene que cambiar y la forma de hacerlo es modificando las facultades legales de la Sedesol para que pueda coordinar efectivamente el gabinete social.

Tiene que haber una reingeniería de la política social en donde la Sedesol es el conducto para que otras secretarías hagan su tarea en este tema”.

“Como coordinadora de los esfuerzos del gabinete social, debería garantizar, por ejemplo, que en la secretaría de salud la prioridad fuera la atención de zonas que no cuenta con servicios, las más pobres. Que los programas educativos privilegiaran las zonas con rezago, que se concentra en la educación media superior y el sureste del país. En el caso de los subsidios al campo, que éstos sean progresivos, es decir, que sean proporcionalmente mayores para los productores de menores recursos y menores para los de mayores posibilidades económicas”.

¿Usted ve que este cambio se esté perfilando, que se vaya a dar?

No lo sabemos, la verdad es que no hay algo específico en ese sentido que podamos decir que lo anticipa.

¿Qué debería pasar con los programas actuales, que mantienen a las comunidades en el límite y sin mejorar su situación y sus oportunidades?

“Más que programas específicos por comunidad, hay que ver esto en términos de desarrollo regional.

Las políticas públicas del país en general, de forma directa o indirecta, han dado más atención al norte. Esto se ve en el gasto federal y en el gasto público descentralizado: el gasto por persona es igual en cualquier región del país. Los estados del norte tienen mayores posibilidades de generar sus propios recursos para completar los de la federación. Lo que tendrían que hacer, más que revisar programa por programa, es cambiar las fórmulas de asignación de los recursos, en particular de los ramos 28 y 33, para dar incentivos al desarrollo en las zonas más rezagadas. Esta es una visión más de conjunto. Si no arreglamos primero el desbalance regional de las finanzas públicas, poco va a importar el tipo de programas que saquen a nivel local”.

El programa de becas que está anunciando la futura administración, ¿puede realmente abonar a abatir la pobreza o a reducir la brecha de desigualdad?

Tanto para la escuela como para el empleo han mostrado que son útiles, efectivamente dan incentivos para que se completen más años de escolaridad o para que el primer empleo sea formal. Pero son absolutamente insuficientes. En muchas ocasiones importa más lo que se aprende que tener otro año de escolaridad. Si estos estímulos no van emparejados con una re-

visión del enfoque pedagógico en la escuela y con la formación de habilidades para la vida, tendrán un efecto muy limitado. Lo mismo en el caso del mercado laboral. Se puede tener entrada a un empleo formal, pero eso no garantiza sostenerse ahí, sobre todo si no aumentan a la velocidad suficiente los trabajos del sector formal. Esto requiere reformular los incentivos a la economía para que se generen más trabajos formales. Por ejemplo, un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos generales en lugar de contribuciones obrero-patronales podría abonar a tener un mayor dinamismo del sector formal y la generación de empleos que garantizaría a los jóvenes mantenerse en la formalidad después de recibir una beca”.

¿Qué más se debe de hacer para abordar este tema tan crítico en el campo?

“Hay políticas muy importantes que no dependen solo de nuestro país. Una es la apertura comercial. Estados Unidos y Europa manejan una cantidad extraordinaria de subsidios agrícolas que ponen en desventaja a los pequeños y medianos productores de nuestro país. En la medida que reduzcan el proteccionismo de estos países se pueden abrir oportunidades para que crezca la economía agropecuaria, sobre todo de los productores que hoy están en desventaja frente a otros países. También está la construcción de infraestructura, sobre todo de comunicaciones, para que zonas que tienen desventajas para entrar a los mercados puedan superarlas con carreteras, ferrocarriles, puertos y otras comunicaciones”.

“Es importante mencionar que hay varios diagnósticos sobre el campo, muchos son coincidentes, pero la administración que va a entrar no ha dado señales claras de qué va a hacer. Ha hablado de la autosuficiencia alimentaria cuando en el mundo, especialmente Naciones Unidas, habla más de la soberanía alimentaria, que es diferente. Tenemos que ver cómo van a interpretar los términos y las experiencias de otros países para llegar a políticas concretas. En estos momentos hay una gran incertidumbre respecto a realmente qué va a hacer la próxima administración”.

“Como coordinadora de los esfuerzos del gabinete social, Sedesol debería garantizar, por ejemplo, que en la secretaría de salud la prioridad fuera la atención de zonas sin servicios. Que los programas educativos privilegiaran las zonas con rezago. En el caso de los subsidios al campo, que éstos sean progresivos, es decir, proporcionalmente mayores para los productores de menores recursos y menores para los de mayores posibilidades económicas”.

Secretaría del bienestar: desarrollo rural de cara a los bosques

María Luisa Albores, quien presidirá la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social), explica a *La jornada del campo* cuáles son las primeras medidas que tomará para atender la situación en el campo mexicano, en particular en las zonas forestales. Entre sus preocupaciones está frenar el desmantelamiento invisible de la propiedad colectiva.

“Para frenar el desmantelamiento tácito del ejido y la pequeña propiedad, el nuevo gobierno se compromete a trabajar un proyecto muy ambicioso donde se dará atención integral a pequeños productores. Se fomentará la canasta de ingresos campesinos de la siguiente manera: sistemas agroforestales con productos con valor de mercado enfocados a sustituir importaciones (maderables, cacao, hule, café canela entre otros); manejo de bosque comunitario, en el que los ejidos que aún cuenten con reservas de bosque los aprovechen de manera sustentable con extracción de maderas y productos no maderables; pago por servicios ambientales en reservas de bosque sin manejo, ganadería sostenible en sistemas silvopastoriles; y finalmente, huertos familiares, traspatio y granos básicos, princi-

palmente la milpa, para fortalecer la soberanía alimentaria comunitaria y nacional”.

¿En qué consiste el programa de 1 millón de hectáreas?

“En el programa de un millón de hectáreas de sistemas agroforestales se establecerán policultivos de alto valor (maderables intercalados con café, cacao, hule, coco, entre otros), en tierras degradadas, principalmente potreros y acahuales, para fortalecer las economías campesinas, comunitarias y sociales. El programa apoyará a 420,000 campesinos y pequeños productores con un empleo permanente durante el establecimiento de la plantación y con asesoría técnica e insumos oportunos. Así mismo se fomentará la organización a través de cooperativas y empresas de la economía social para cami-

nar hacia un comercio justo de la producción”.

¿Cuáles son sus etapas de instrumentación?

“Se establecerán 500,000 hectáreas en el 2019 y 500,000 en el 2020, el acompañamiento con empleo y asesoría técnica se dará a lo largo de todo el sexenio. Se espera que después de lograr el establecimiento pleno de los sistemas agroforestales se camine hacia la organización para la economía social para establecer cadenas de valor justas”.

¿Quiénes intervienen en el programa?

“Los campesinos organizados son la pieza central del proyecto y se formará un cuerpo operativo de acompañamiento con técnicos

“Para frenar el desmantelamiento tácito del ejido y la pequeña propiedad, el nuevo gobierno se compromete a trabajar un proyecto muy ambicioso donde se dará atención integral a pequeños productores. Se fomentará la canasta de ingresos campesinos; el manejo del bosque comunitario, el pago por servicios ambientales en reservas de bosque sin manejo, la ganadería sostenible en sistemas silvopastoriles y los huertos familiares, el traspatio y los granos básicos, principalmente la milpa, para fortalecer la soberanía alimentaria comunitaria y nacional”.

especialistas en producción y organización, acompañados por un respaldo de científicos en temas ambientales y productivos, sociales y económicos, sobre todo en comercialización y cadenas de valor”.

¿Y los jóvenes?

“Los técnicos estarán acompañados de un grupo de becarios comunitarios (48,000 de edades de 18 a 23 años), del programa Jóvenes con futuro de la Secretaría del Trabajo, quienes participarán en la promoción, la capacitación y los trabajos necesarios en la comunidad para llevar a buen término el proyecto. También se fomentará que jóvenes migrantes y de la comunidad de 23 años en adelante se integren

como campesinos productores y comercializadores”.

“La meta fundamental es el rescate del ejido y la pequeña propiedad en México. Concretamente se espera que las unidades de producción rural (familias campesinas) más desfavorecidas del país logren tener ingresos superiores al salario mensual del programa (que rondará los cinco mil pesos) a partir del cuarto año de la intervención. Así mismo, se propone que a través de la economía social se camine por la senda del valor agregado y que las comunidades rurales se integren de manera completa y definitiva al desarrollo y los mercados nacionales. Las metas puntuales están en proceso de definición”.



De izquierda a derecha: Javier May, María Luisa Albores, Andrés Manuel López Obrador y Hugo Chávez.

Bosques con todos: agenda para el desarrollo forestal sustentable

Leonardo Bastida

De los 21 millones de metros cúbicos de madera que se utilizan año con año en el país, 14 millones tiene un origen ilegal, y de éstos, sólo son recuperados por las autoridades alrededor de 30 mil, de acuerdo con datos del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la UNAM, grupo de investigadores que ha advertido sobre el impacto económico y social de la tala ilegal en las diferentes comunidades forestales del país, cuyo sustento depende, de manera directa, de la venta de las maderas obtenidas de los bosques a su cargo, explotados de manera sustentable y comunitaria.

A través de un diagnóstico, elaborado a propósito de la necesidad de establecer un agenda ambiental para los próximos años, el Susmai refirió que los bosque, selvas y vegetación forestal de otros tipos abarcan el 60 por ciento del territorio mexicano, siendo el sustento de miles de personas, albergando diversidad biológica y permitiendo la captura, provisión y calidad de agua, protección de suelos y hábitat para la biodiversidad.

Sin embargo, su aprovechamiento no es óptimo debido a factores como una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas para el mejoramiento de la producción y rentabilidad de dichas zonas, la limitada investigación forestal, la inadecuada infraestructura de movilidad y la compleja regulación para el comercio de productos forestales, sumado a la inapertura por parte de las autoridades para involucrar a las comunidades en las decisiones en materia de manejo de bosques, y a que las dependencias como la Comisión Nacional Forestal solo otorgan subsidios pero no generan acciones múltiples e integrales que atiendan las problemáticas de desarrollo forestal y las comunidades.

Ante el panorama, comunidades, académicos, profesionales forestales, pueblos indígenas, sociedad civil e industriales emitieron el documento "Bosques con todos. Propuesta de una nueva política forestal" con la finalidad de que sea tomado en cuenta por la próxima administración, para reactivar la producción forestal sustentable,

generar empleos permanentes y de calidad en el campo e insertar a la actividad forestal en la economía formal del país, para revertir el panorama actual, en el cual, quienes son propietarios de los recursos del bosque son pobres y padecen marginalidad.

La primera de las propuestas es la creación de un programa de planeación forestal a largo plazo que permita llevar a cabo una gestión forestal correcta, la cual requiere de entre seis y 20 años para el cumplimiento de los ciclos naturales. Además de ser integral, ecosistémico, participativo, respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y enfocado al uso múltiple y obtención de diferentes bienes, productos y servicios ambientales.

También propone incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, las cuales, deben estar ceñidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y las reformas constitucionales en la materia.

El impulso al manejo forestal comunitario es otro de los aspectos destacados de la propuesta. Como parte de esta visión se debe promover la apropiación de los procesos productivos por parte de las comunidades, el reconocimiento del rezago para propiciar el desarrollo humano, la elaboración de un programa de manejo forestal sustentable, la apertura de oportunidades en el mercado, la simplificación de trámites y procesos para la gestión de bosques.

La sustentabilidad es otro factor a tomar en cuenta. Para lograrlo, se considera necesario identificar y

resolver las causas de la baja cosecha de madera y rediseñar los programas de plantaciones forestales con esquemas flexibles de financiamiento. Además del desarrollo de servicios turísticos y productos no maderables y la promoción de la producción maderera nacional de origen legal.

De igual manera, se hace un llamado a la inversión pública en dos rubros: manejo forestal sustentable comunitario y tecnología. En conjunto con una mejor organización de los pequeños propietarios y su capacitación para conformar empresas forestales comunitarias, el impulso de estímulos fiscales y subsidios, la modernización de sistemas de cosecha de productos forestales maderables y el desarrollo de investigación para promover el uso de especies de origen local con potencial de producción rentable.

En materia legal, se plantea que hay inconsistencias en la recién publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Entre ellas, los procedimientos actuales, los cuales requieren de una simplificación. Sumado a la revisión y actualización de las normas oficiales vigentes y la implementación de un programa integral que cree la distinción "producto legal", a fin de promover la producción y consumo de materias primas forestales provenientes de fuentes autorizadas.

La institucionalización del manejo de bosques requiere de una gestión participativa, un fortalecimiento regional y la descentralización de las gestiones, así como un fortalecimiento a la cultura forestal del país y el desarrollo de esquemas de certificación de profesionales en determinadas áreas de la actividad forestal.



Calakmul, Ejido Nuevo Becal, Campeche



Talleres comunitarios en Oaxaca.

Por otra parte, se considera necesario cumplir la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cual establece que los bosques tienen un papel primordial al ser reservorios de carbono, por lo que se deben promover sistemas de captura de carbono, y, por ende, reconocer los derechos de carbono a favor de los propietarios de suelos forestales.

Y, recuperar y fortalecer los esquemas locales de producción y conocimiento tradicional, como lo establecen el Protocolo de Nagoya y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, e incrementar las acciones correspondientes al Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación referentes a la mitigación de la sequía y al aprovechamiento responsable de los recursos hídricos y la tierra.

Comunidades, académicos, profesionales forestales, pueblos indígenas, sociedad civil e industriales emitieron el documento "Bosques con todos. Propuesta de una nueva política forestal", con el fin de que la próxima administración tome las medidas necesarias para reactivar la producción forestal sustentable, generar empleos permanentes y de calidad en el campo e insertar a la actividad forestal en la economía formal del país.

**Descarga aquí
el documento
completo *Bosques
con todos:***

<http://www.ccmss.org.mx/bosques-con-todos>



Mujeres indígenas de Oaxaca.

Descolonizando pensamientos y prácticas

Epifanio Díaz Sarabia epidiaz@hotmail.com

En esta última semana se ha arreciado el debate en los espacios periodísticos ya reservados y consagrados a determinados “intelectuales orgánicos” más cercanos a la élite intelectual de la pequeña burguesía (como bien lo expresa Eduardo Garfias en su columna en el periódico Noticias de Oaxaca) que, al pensamiento de los pueblos originarios de esta nación, en el sentido de si con el nuevo gobierno estamos asistiendo a un nuevo “neoindigenismo”. Lamentablemente, el silencio que ha guardado Andrés Manuel López (AMLO) tanto en su campaña y ahora como presidente electo, respecto a la condición política y colonizadora en que sobreviven actualmente los pueblos indígenas de nuestro país, me empuja a reconocer cierta razón a estas voces distantes culturalmente y divergentes políticamente.

En efecto, no obstante los datos estadísticos oficiales del INEGI (censo 2015), que dicen que más del 23% de la población mexicana tiene alguna adscripción étnica, el presidente electo ha omitido identificar en su discurso político

al Estado Mexicano como un Estado plurinacional o pluricultural, minimizando, por el contrario, la representación de los pueblos en el gobierno de la cuarta transformación, al limitarlo a las coordinaciones indígenas de los estados, en lo que en otros tiempos fueron los centros coordinadores indigenistas.

Asimismo, en materia de crecimiento económico, en reiteradas ocasiones el próximo jefe de ejecutivo ha apuntalado el proyecto del

“tren maya” y el “corredor transistmico”, los cuales, en caso de ejecutarse afectarán de alguna u otra manera el hábitat y los territorios indígenas de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, elementos socioculturales fundamentales no solo para el ejercicio del derecho a la libre determinación de las naciones originarias, sino también de protección internacional, particularmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración

El presidente electo ha omitido identificar en su discurso político al Estado mexicano como un Estado plurinacional o pluricultural, minimizando, la representación de los pueblos en el gobierno de la cuarta transformación, al limitarlo a las coordinaciones indígenas de los estados, en lo que en otros tiempos fueron los centros coordinadores indigenistas.

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre los cuales los gobiernos no pueden imponerse unilateralmente, si no es a través de una consulta previa, informada y de buena fe a los pueblos interesados.

Ante este escenario, se hace necesario efectuar acciones concretas, no tanto de políticas públicas, en la medida que no solamente existen necesidades indígenas por satisfacerse, sino que es necesario el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, lo que puede ser logrado a partir de una interpretación progresiva de los derechos por parte de las legislaturas de los Estados, tal y como ya lo han establecido la Suprema de Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que prevalecen en nuestra sociedad condiciones de colonización y explotación que hay que erradicar.

Las acciones que proponemos son transversales, en la medida que atraviesan pensamientos, prácticas, instituciones o actividades legislativas. Dichas medidas, parten de hechos como que el presidente electo reciba y dialogue, en un marco de respeto y aprendizaje con los representantes legítimos de los pueblos.

Descolonizar las instituciones significa ir más allá de transformar la CDI en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; descolonizar implica la creación de un organismo más apegado a la figura de una

Fiscalía o una auditoría, un organismo autónomo, representativo, con facultades acusatorias, vinculantes y de auditoría institucional de programas y acciones de gobierno, y no solamente un organismo de implementación de políticas públicas o “recomendaciones” como los actuales organismos de derechos humanos, que se erigen como verdaderos “elefantes blancos” despilfarradores del presupuesto público.

Descolonizar no solo es crear un programa universitario de estudios indígenas en alguna universidad pública; implica hacer reformas a la Ley General de Educación, las leyes orgánicas de la Secretaría de Educación Pública y de las universidades públicas y privadas que nos permitan en cada carrera universitaria, en cada posgrado, en cada mapa curricular, en cada trabajo de investigación, incluir estudios relacionados con los conocimientos indígenas y su situación actual de explotación y colonización.

Descolonizar, implica tipificar sin temor los delitos de racismo o discriminación, cometidos por servidores públicos y por particulares. Significa garantizar la representación indígena en una cuarta parte del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados, siendo la vía plurinominal la idónea para ello. La libre determinación, basado en las ideas de la comunalidad, la interculturalidad o el socialismo, es la condición superior a que aspiran todos los pueblos indígenas como una forma de erradicar cualquier estado de colonización o indigenista. 🗑️

Por el bien de todos, primero la sustentabilidad

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente electo de México

Al menos durante cincuenta años millones de mexicanos esperamos este momento, que, aunque como dice Pablo Milanés, no es perfecto, se parece mucho a lo que simplemente soñamos.

Hace 25 años inicié mi vida profesional en la administración pública y me he dedicado a apoyar procesos encaminados a lograr una verdadera transformación social, a través de la búsqueda de una apropiación social de los recursos naturales por los dueños del capital natural de nuestro país. Mi padre, luchador social, ya fallecido, me animó a aceptar un cargo público, ante mi reticencia: “podrás hacer mucho más por los pobres campesinos de México desde dentro; hazlo”, me dijo.

Como usted sabe, por su riqueza natural y cultural, México es considerado uno de los cinco países megadiversos del mundo, no obstante, la pérdida de su biodiversidad es alarmante; en algunas regiones como la selva Lacandona o la de Los Tuxtlas, en los pasados 30 años se ha reducido a menos de la mitad. Esta condición no solo deja a los campesinos, muchos de ellos indígenas, completamente vulnerables, cada vez más lejos de una vida digna y del arraigo a su terruño, sino que también aumenta el riesgo de cambio climático y debilita la base de su sustentación productiva y de aprovechamiento de los elementos naturales, lo que los empuja a la migración forzada, como peones o activos del crimen organizado.

El ahora director de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegú, publicó junto con el investigador Héctor Robles Berlanga un informe que demuestra que el 94 % de los subsidios de los programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) están dirigidos a los grandes empresarios del campo, mientras los pequeños productores solo tienen posibilidad de acceder a uno, máximo dos programas, generando una desigualdad vergonzosa en el medio rural.

Así también, hace 6 años la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) publicó un trabajo que demuestra que las zonas de más alta biodiversidad por su pluralidad en especies y ecosistemas, así como por su extensión, son las regiones más marginadas. El investigador Eckar Boege, ya había demostrado en un extraordinario libro, la misma correlación absurda en las regiones bioculturales de todo el país.

Todo este corolario es para argumentar que la política del bienestar social debe sustentarse en una estrategia económica productiva y de soporte ambiental aspiracional de largo aliento. Favorecer las bases de un desarrollo regional diferenciado por las condiciones naturales preferentes, amparado en las mejores prácticas sostenibles, se antoja como marco a una política integral territorial. Si el afán es dejar en manos de la nueva Secretaría del Bienestar Social la reforestación productiva, es necesario tener la seguridad de que esta sostenga una propuesta económica rentable y de mediano y largo plazo.

La soberanía alimentaria propuesta en la plataforma política de Morena debe considerar al menos tres características adicionales, a saber: conocimiento detallado de nuestros cultivos

y parientes silvestres; reconocimiento, validación e instrumentación de prácticas productivas del conocimiento tradicional de pueblos originarios y poblaciones locales en todo el territorio nacional, e incorporación de la cultura alimentaria multidiversa de México. Por lo anterior, sería sustantivo que el CONACYT fuera la cuarta pata de la mesa de la sustentabilidad agrobiodiversa que requiere nuestro país.

La conservación de nuestro capital natural no puede sostenerse en una estrategia importada de los parques nacionales estadounidenses o ingleses. Las áreas protegidas de este país complejo, con dueños y poseedores de la mayor parte de ese capital natural, deben ser el centro de una política de manejo y conservación administrada por ellos mismos y acompañada por el estado mexicano a través de la Comisión Nacional de Áreas protegidas (Conanp), pero con nuevas categorías, más incluyentes y no excluyentes de la administración de nuestro patrimonio natural. La experiencia de cientos de comunidades y ejidos, que el ecólogo Víctor Toledo ha documentado a lo largo y ancho del territorio nacional, demuestra que las prácticas colectivas de manejo y conservación de la riqueza natural con reglas y supervisión propias amparadas en los usos y costumbres y mecanismos de vigilancia y sanción local son mucho más eficientes y eficaces que las políticas punitivas del gobierno federal. En mi tesis doctoral, “Gobernanza de la Biodiversidad” arribo a esas mismas conclusiones.

La constitución de nuevas categorías de manejo de espacios naturales conservados como las reservas bioculturales, los corredores biológicos y la mayor participación activa de las comunidades en las decisiones de la política de áreas protegidas sería una buena señal para impulsar una innovadora conservación de nuestra riqueza natural con un verdadero rostro humano plural y colectivo. De ahí el título de este artículo. De lo contrario, condenaremos a los más pobres de este país, indígenas y campesinos de las regiones más ricas en biodiversidad, a nunca salir de la pobreza, a perder su capital natural y a depender del Estado en una política insostenible de subsidios perversos que perpetúan la pobreza rural.

Los bancos campesinos regionales serían la mesa para impulsar una política agropecuaria, forestal, pesquera y de manejo de la vida silvestre que con inversión pública y créditos justos potencien el consumo nacional, el desarrollo local y regional la exportación agroindustrial de productos de excelencia como la miel, el café y el cacao, entre otros, y entrelacen las ciudades con su entorno rural, favoreciendo a la vez los servicios ambientales que proveen a todos, para juntos hacer sustentable la historia en la cuarta transformación que usted afortunadamente encabeza.

Pedro Álvarez-Icaza

La cultura no se vende, se vive y se defiende

María Guadalupe Bolaños Ceja

La famosa carrera de la tortilla en Tehuacán y sus alrededores, se realizó bajo condiciones diferentes en esta ocasión, pues días antes, las mujeres de Santa María Coapan convocaron a una marcha bajo el lema “Por la dignificación del trabajo de las mujeres de Coapan”.

¿Motivos de la manifestación?: la forma en la que se les ha venido tratando por parte de las autoridades de Tehuacán, y que la carrera de la tortilla fue patrocinada por Maseca. En la convocatoria difundida en un video posteo en Facebook se dijo: “no estamos en detener la carrera de la tortilla, estamos en darle un realce auténtico y natural, nuestras autoridades se confundieron realizando este tipo de carrera, invitando al patrocinador Maseca, pero allá ellos y su dignidad, la dignidad de Coapan no se vende con un premio tan extravagante... únete a la gente que se realiza, que se prepara, que come, que viste, que calza, haciendo las tortillas cien por ciento de maíz natural... ¿podrías acompañarnos?, punto de reunión, en el parque de Santa María Coapan, 8 de la mañana”. Fue así como las 9 de la mañana las mujeres de Coapan ya se encontraban en el parque, donde además de su vestimenta tradicional, llevaban en sus trenzas un moño negro y blanco.

Ver [¿Qué es la carrera de la tortilla y por qué este año causó protestas](https://manati.mx/2018/08/05/carrera-tortilla-tehuacan-maseca-protesta/), <https://manati.mx/2018/08/05/carrera-tortilla-tehuacan-maseca-protesta/>.

El contingente arribó a las nueve y media el transporte que lo llevaría al Parque Juárez en Tehuacán, que también fue el punto de partida de la carrera de la tortilla y donde señalaron que: “Santa María Coapan está en lucha y está de pie, hemos sido pisoteadas, debemos dignificarlos, no queremos a MASECA, señora Presidenta, venga a ver lo que está usted haciendo, usted quiere quedar bien con el turismo, ese no es un turismo, esto es una tradición, es una cultura, va a quedar muy en claro que la carrera de la tortilla es patrimonio cultural de Santa María Coapan, no de Tehuacán”

Dijeron que el que Maseca sea patrocinador de la carrera, las desprestigia, pues no utilizan harinas comerciales para elaborar sus tortillas, sumado a lo que han tenido que lidiar en cuanto a la comercialización:

“No estamos en contra de la carrera de la tortilla, estamos en contra del patrocinio y por nuestra dignidad como mujeres coapenses, nos maltrataron, nos humillaron, quieren que nosotras las mujeres seamos engañadas, que con un premio grande vayamos y con eso, ya se olvidó todo el maltrato, el pueblo no se va a dejar, aquí estamos presentes para dar nuestra opinión, alzar la voz, Coapan está presente, nosotros pedimos res-

peto de las autoridades, ¿por qué?, nos han perseguido, nos han encarcelado, nos han maltratado, nos han golpeado, nos han esposado, cuando nosotros hacemos un trabajo digno de la mujer coapense, no estamos robando, no estamos matando, no estamos haciendo mal a nadie”.

A finales de 2017, la presidenta municipal Ernestina Fernández, comenzó a impedirles comercializar sus tortillas, Ver “Una vendedora de tortillas es detenida en Tehuacán, Puebla, por dar mal aspecto a las calles” (Video), <http://www.sinembargo.mx/29-01-2018/3379124>.

Los niños de Santa María Coapan encabezaron la marcha, se escuchaban consignas como: “La cultura no se vende, se vive y se defiende”, “El pueblo unido jamás será vencido” “Ni mil ni cinco mil, de nada les va servir”, “No vamos a vender nuestra dignidad”, “vender tortillas no es un delito, gracias a las tortillas que vendemos día a día, muchas le hemos dado carrera y comida a nuestros hijos” y en ocasiones, fragmentos en náhuatl.

Las coapeñitas repartían tortillas y derivados del maíz a la población de Tehuacán, muchos de ellos con lágrimas en los ojos y aplaudiéndoles, les mostraban su apoyo. Hubo confusión en cuanto a invadir el carril de la carrera, pues una fracción del contingente lo invadió, ante esto se hizo hincapié a la cero violencia, invitando a ocupar el carril que le correspondía a la marcha, además de hacer valla con sus rebosos. De acuerdo a lo señalado por ellas, algunas competidoras de la carrera, no se dedican a la elaboración de tortillas.

Ver video: https://www.facebook.com/517522232040538/videos/519858315140263/?hc_ref=ARQW5J17_LJlVA-4bhjn-uE2ynOLYBjcs4wPp-zcCA6-DqMpcrJXrbEEo9_GT4e-uqo&fref=nf

En el monumento a la mujer coapeña se explicó su significado, posteriormente una coapeñita, además de recalcar algunas consignas, agradeció el apoyo de hombres y algunos negocios de la comunidad, el contingente entró al centro por donde ya había llegado la carrera, “pues nos merecemos entrar también por ahí”, dijeron. Algunos habitantes ya las esperaban. Después del medio día se arribó a la presidencia municipal, en el Kiosco se concluyó con la entrega de regalos que donó la comunidad. Fue así, como en esta ocasión las coapeñitas en vez de correr, marcharon para exigir el respeto de las autoridades de Tehuacán. 🍌

“Vender tortillas no es un delito, gracias a las tortillas que vendemos día a día, muchas le hemos dado carrera y comida a nuestros hijos”



Únete a la gente que se realiza, se prepara, come, viste, calza, haciendo tortillas cien por ciento de maíz natural...

“La cultura no se vende, se vive y se defiende”



“No estamos en contra de la carrera de la tortilla, estamos en contra del patrocinio”.

Todo el apoyo para Brasil y su pueblo

Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe



FOTO: Eduardo Matysiak - Mídia Ninja

Desde el Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe, exigimos que se ponga en libertad a *Lula*, que está preso por motivos exclusivamente políticos.

El objetivo de este número de *La jornada del campo* es recopilar diferentes experiencias y opiniones acerca de lo que está aconteciendo en Brasil, a partir del *impeachment* de Dilma Rouseff en 2016 y hasta el encarcelamiento del ex presidente Lula Da Silva, en abril de este año.

Sin lugar a dudas, Brasil está viviendo un golpe de estado cuya consolidación ha pasado por diversas etapas: el *impeachment*, la imposición de Michael Temer y ahora el encarcelamiento de Lula. Todos estos actos de la derecha brasileña tienen como objetivo ganar las elecciones presidenciales de octubre de este año, a fin de garantizar el control en los próximos años de los recursos del país: petroleros, minerales, hídricos, naturales, energéticos, entre otros.

Ante este escenario, hicimos este suplemento dedicado a Brasil como parte del apoyo a las organizaciones y luchas brasileñas con las que hemos coincidido numerosos mexicanos y mexicanas.

Los que somos

El *Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe* surgió en marzo de 2016, en el momento en que el golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff se estaba organizando. Fruto de la iniciativa espontánea de brasileñas y brasileños residentes en México, contó con el apoyo de ciudadanos mexica-

nos y de otros países que viven aquí, preocupados por la situación política de Brasil.

A lo largo de más de dos años de actuación, el Colectivo ha realizado diversas acciones y ha sido parte activa de las manifestaciones organizadas por diferentes colectivos alrededor del mundo. De la unión de estas iniciativas internacionales surgió el Frente Internacional de Brasileños y Brasileñas en el Mundo Contra el Golpe – FIBRA.

Los colectivos que forman parte de FIBRA vienen cumpliendo un importante papel en el escenario internacional al orientar a los medios de comunicación extranjeros acerca de las diversas etapas del golpe de Estado en curso, además de explicarles sobre la resistencia popular organizada contra él.

Los medios hegemónicos brasileños no han cumplido con su papel de informar sobre la resistencia al golpe, precisamente porque son uno de los protagonistas de este ataque histórico a la democracia brasileña.

Los colectivos que forman parte de FIBRA han logrado combatir esta voz hegemónica, con el apoyo de figuras públicas destacadas de cada país en el que actúan, convirtiéndolas en presión internacional para Brasil.

En México, intelectuales y artistas como Lilliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Juan Villoro, El Fisgón, Damián Alcázar, Gael García Bernal, además de representantes de sindi-

catos y partidos políticos de país, de manera solidaria, ya han manifestado públicamente su posición contra el golpe.

En Brasil, diversos movimientos de resistencia contra el retroceso que representa el gobierno golpista dirigido por Michel Temer también se organizaron en diversos momentos: en el campo, en las ciudades, las universidades, los sindicatos, entre artistas independientes. Hemos asistido a la pérdida de derechos laborales y al aumento del desempleo, a la imposición de una política de recortes en los recursos para la investigación

Sumen sus voces así:

#ForaTemer

#LulaLivre

Apoyen nuestras actividades aquí:

Facebook:

[colectivomexicobrasil](https://www.facebook.com/colectivomexicobrasil)

E-mail:

contraelgolpe2016@gmail.com

en ciencia y tecnología y a la amenaza de la privatización de PETROBRÁS.

Los pueblos indígenas y los *quilombolas* tuvieron sus proyectos de demarcación de tierras retirados de la votación en el Congreso Nacional. Los campesinos, sin alternativas, cada día migran más y más a las ciudades para sobrevivir, ya que los programas de estímulo a la producción rural son eliminados. Estos son solo algunos ejemplos del devastador retroceso que el pueblo brasileño sufre ahora, bajo este gobierno ilegítimo

Durante más de dos años, el *Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe* ha militado en la Ciudad de México como portavoz de la denuncia sobre la ruptura del Estado democrático de derecho en Brasil y del fascismo que se instala paulatinamente en el país. También ha repudiado la ejecución de la concejala Marielle Franco y la prisión injustificable del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, además de alertar que este golpe de Estado jurídico, mediático, parlamentario y empresarial no solo afecta a Brasil, sino también a toda Latinoamérica.

Los movimientos sociales brasileños se fortalecen cuando reciben, a través del Colectivo, apoyo de sindicatos, partidos políticos, artistas y académicos mexicanos. El pueblo seguirá resistiendo. Las brasileñas y brasileños fuera del país seguirán denunciando la situación que se vive allá en diferentes idiomas, hasta conquistar otra vez la democracia en Brasil, hasta que Lula sea reconocido como preso político y liberado por haber sido condenado sin pruebas y para que pueda ser candidato a la Presidencia de la República. 🇧🇷

Sin lugar a dudas, Brasil está viviendo un golpe de estado cuya consolidación ha pasado por diversas etapas: el *impeachment*, la imposición de Michael Temer y ahora el encarcelamiento de Lula. Todos estos actos de la derecha brasileña tienen como objetivo ganar las elecciones presidenciales de octubre de este año, a fin de garantizar el control en los próximos años de los recursos del país: petroleros, minerales, hídricos, naturales, energéticos, entre otros.



Momentos graves para Brasil.



La industria del petróleo está en pleno proceso de destrucción.

FOTOS: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

El golpe y sus consecuencias

Gilberto Carlos Cervinski Movimento dos Atingidos por Barragens

Brasil atraviesa un momento gravísimo. En 2016 la presidenta electa Dilma Rousseff fue injustamente depuesta por medio de un *impeachment*. Luego, el Poder Judicial brasileño condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y un mes de prisión. Lula es víctima de una condena política sin pruebas, que tiene como objetivo impedir que sea candidato a la presidencia de la República en las elecciones de octubre de 2018. Actualmente, Lula lidera todas las encuestas de intención de voto y sería electo presidente en la primera vuelta. Estos hechos son parte de un golpe contra la democracia y contra el pueblo brasileño.

Hoy en día el gobierno brasileño es liderado por el ilegítimo y golpista Michel Temer, vicepresidente durante el gobierno de Dilma, que asumió el poder después del golpe. Para octubre de este año están previstas las elecciones, y por eso los sectores de la élite que articularon el golpe junto al Poder Judicial trabajan sistemáticamente para impedir que Lula sea candidato.

El golpe fue organizado por la clase patronal contra el pueblo, contra la democracia y la soberanía nacional. El principal objetivo fue re-alinear a Brasil con el neoliberalismo y el servilismo al imperio estadounidense, para entregar las principales riquezas, privatizar el patrimonio público, imponer un ataque a los derechos sociales y laborales y acabar con las conquistas de la clase trabajadora de los años recientes. El plan es crear las condiciones para explotar más al pueblo y recuperar las tasas de lucro

del capital. Para eso fue preciso dar un golpe, para recuperar el control pleno de todas las estructuras del Estado y establecer un gobierno cien por ciento alineado con el capital.

América Latina es protagonista de luchas históricas contra la explotación europea y estadounidense y, en décadas recientes, contra el neoliberalismo. Estas luchas crearon condiciones para el ascenso de fuerzas y gobiernos progresistas, neo-desarrollistas, que por medio de políticas más progresistas ya no se alineaban totalmente con la política estadounidense. Desde 2003, los gobiernos Lula y Dilma buscaron diversificar el comercio mundial, con mayor articulación con China y Rusia a través de los BRIC. También se fortaleció la integración regional y latinoamericana, se promovieron cambios constitucionales y legales en el sector petrolero, ampliando el control del Estado y se fortaleció la articulación con Cuba en el área de salud.

Esas son algunas de las iniciativas que no se alinean totalmente con las políticas hegemónicas mundiales lideradas por los países imperialistas, que los incomodaba y dejaba insatisfechos con el comportamiento de Brasil en la geopolítica mundial. El golpe ocurrió en un contexto en que el gobierno brasileño había descubierto una de las mayores reservas mundiales de petróleo, el denominado pré-sal. Se estima que las reservas de este yacimiento sean de 176 billones de barriles, lo que puso a Brasil entre las cinco mayores reservas mundiales de petróleo.

La crisis del capitalismo mundial de 2008 llegó con fuerza en Brasil

a partir de 2012 y frente a esta situación el gobierno de la presidenta Dilma adoptó una serie de medidas progresistas para enfrentar con fuerza al sistema financiero internacional; entre ellas la reducción de las tasas de interés y el control de los precios de la energía eléctrica, en especial de usinas ya amortizadas. Esas iniciativas causaron gran insatisfacción en los sectores rentistas.

A pesar de la profundización de la crisis, el candidato Aécio Neves (PSDB), representante del neoliberalismo, perdió las elecciones de 2014, y Dilma Rousseff fue electa para un segundo mandato. Desde entonces, los sectores derrotados en las urnas iniciaron una fuerte ofensiva para sacarla del cargo. El *impeachment* no tuvo que ver con acusaciones de corrupción. El pretexto usado por los políticos de la oposición fue la "pedaleada fiscal", un procedimiento de rutina en la gestión del presupuesto en todos los niveles de gobierno, usado por la mayoría de los mandatarios.

La presidenta depuesta no cometió ningún crimen; hasta ahora su nombre ha quedado fuera de todas las investigaciones, ya que no existe ni la menor sospecha de que esté involucrada en casos de corrupción. Rousseff será candidata al Senado Federal por el estado de Minas Gerais en las elecciones y lidera las encuestas. El golpe fue conducido por el capital financiero y las transnacionales, banqueros, industriales y políticos financiados y comprometidos con los intereses del empresariado. También es ejecutado por la burocracia rica del Estado brasileño, que involucra al Poder Judicial, a una parte del Supremo Tribunal Federal, la Policía

Federal y el Ministerio Público, además de sectores conservadores de iglesias pentecostales. Otros dirigentes del golpe son los empresarios de los medios de comunicación, en especial la Red Globo y sus filiales, históricamente al servicio de las élites y el capital internacional, inclusive durante el golpe militar de 1964. También la clase media cumplió un papel importante, organizando manifestaciones reivindicando el *impeachment*.

La policía, supuestamente ligada a una operación de combate a la corrupción -la "Operación Lava Jato"- está cumpliendo un papel importante al servicio del proceso golpista, actuando al servicio de las grandes petroleras extranjeras para privatizar Petrobrás y entregar la reserva de petróleo brasileño al control privado. Actúa como una verdadera policía política, ataca a sectores progresistas y protege de investigaciones a políticos ligados al neoliberalismo. Hay fuertes sospechas de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos están detrás de este mecanismo.

Lo que ocurre en Brasil es parte de una estrategia del imperialismo sobre América Latina. Aquí hay enormes cantidades de petróleo (entre Brasil y Venezuela más de 400 billones de barriles), de agua y ríos -para el abasto humano y la generación de energía-, de tierra fértil y de minerales. Esto sumado a un parque industrial razonable y una clase trabajadora muy productiva. Es un territorio de gran potencial en la producción de valor, con cadenas industriales de producción de lucro. Claramente, una región así está en el foco de las grandes disputas por la hegemonía, sobre todo en un escenario de crisis mundial.

Siempre que el pueblo brasileño vivió períodos positivos en la economía y la clase trabajadora logró avances, la burguesía trató rápidamente de adoptar medidas para revertirlos, acompañada por la extrema violencia contra la clase que trabaja. Para eso, adoptan un "estado de excepción" y de restricciones

a la democracia, como parte de esta dinámica de expansión del capital.

En estos 30 meses de golpe, Brasil pasa por un brutal proceso de destrucción de la soberanía, aumento de la explotación de la clase trabajadora, saqueo internacional de las principales riquezas y patrimonio público y empeoramiento de las condiciones de vida. Nunca en la historia existió un proceso tan violento de destrucción de todas las iniciativas que pudiesen convertir al país en una verdadera nación. El desempleo y el empobrecimiento del pueblo son brutales y el hambre volvió a ser una realidad para millones de familias. Actualmente Brasil tiene cerca de 13 millones de desocupados formalmente reconocidos. Otra consecuencia del golpe.

Todos los avances en la industria del petróleo están en plena destrucción. La Petrobrás está en proceso de fraccionamiento y privatización. El Pré-sal está siendo transferido a empresas privadas extranjeras y se está implementando el modelo de mercado a través de la liberación de los precios, para que asuman parámetros internacionales.

En el sector eléctrico, están previstas privatizaciones de las usinas hidroeléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y distribuidoras de la estatal Eletrobrás. La idea es privatizar todo el sector. Como consecuencia directa, la violación de los derechos de las poblaciones afectadas aumenta.

Otra consecuencia es la explosión del precio de las tarifas. Subieron los combustibles, el gas de cocina y la energía eléctrica, alcanzando los precios más altos del mundo, totalmente fuera de la realidad del país. Brasil produce con uno de los menores costos de producción, pero en este proceso el lucro lo paga el pueblo.

La condena de Lula por el juez Sergio Moro es parte de la estrategia y los objetivos del golpe. Se trata de una persecución política, que además de inviabilizar su candidatura, busca criminalizar y perseguir a las organizaciones y líderes populares de izquierda, hasta aniquilarlos.

No es fácil responder de forma organizada a esta situación, pero debemos seguir firmes en la resistencia, mejorar la lucha y construir una nueva estrategia política para la izquierda, fortaleciendo a la clase trabajadora para regresar al poder a mediano plazo. Esto es central para los pueblos latinos. Para esto es fundamental la unidad entre las fuerzas sociales. No alcanzan las buenas ideas, es necesario un fuerte compromiso con las aspiraciones del pueblo.

¡Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular! 🗣️

Y la violencia política regresó

Anne Vigna Periodista de Río de Janeiro Traducción: Aldo Giacometti

Desde 2016 y con la destitución de Dilma Rousseff por parte del Congreso -una operación que la izquierda designa con el nombre de “golpe de Estado parlamentario”, Brasil parece restablecer sus lazos con un pasado que muchos esperaban enterrado: el de una tierra regida por los “Coroneles” y los “Bandeirantes”, esos caciques locales que empleaban la violencia para deshacerse de los molestos. Los molestos son la izquierda y los necesitados, especialmente los “sin tierra”, que ocupan tierras improductivas que, según la Constitución, deberían ser redistribuidas en el marco de la reforma agraria.

El 13 de mayo, en la conmemoración de los 130 años de la abolición de la esclavitud, uno de los símbolos más destacados de ese triste período, volvió a hacer su aparición en las pantallas de televisión: la fusta de cuero. Grandes terratenientes la usaron para pegarles a campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que esperaban el paso de la caravana del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el sur del país, el 22 de marzo. La senadora Ana Amélia Lemos, del Partido Progresista (PP, derecha), felicitó, sin complejos a esos “verdaderos gaúchos que alzaron sus fustas”.

A lo largo de una carrera política de más de cincuenta años, el ex presidente Lula, encarcelado desde el 7 de abril, pudo recorrer el país sin exponerse a ningún peligro. Pero, durante el mes de marzo tuvo que enfrentarse con una serie de bloqueos organizados por milicias armadas con tractores, piedras e incluso fusiles.

Su objetivo: dificultar la gira que llevaba a cabo el candidato a la presidencia para movilizar a la población en contra de su condena a doce años de prisión por corrupción pasiva. Una condena que denunció la izquierda, pero también 122 juristas brasileños que, en una recopilación de artículos, expusieron la parcialidad de una acusación basada más en la convicción del juez que en pruebas (1).

La investigación policial, que tiene que identificar a los autores de los disparos contra la caravana el 27 de marzo, ya reveló su procedencia: la *fazenda* (gran explotación agrícola) de Leandro Bonotto.

Desde los años noventa, Bonotto se opone violentamente al MST y a las recuperaciones

de tierras dirigidas por el muy oficial Instituto Nacional de Colonización y Reforma

Agraria (INCRA). No es una sorpresa: todos los ataques perpetrados contra la caravana de Lula da Silva fueron preparados por las asociaciones de grandes terratenientes que pregonan abiertamente la violencia contra el MST. Uno de ellos, Gedeão Ferreira, presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande do Sul, ya había declarado durante su entrada en funciones: “Vamos a enfrentar al MST y al INCRA. Sus ocupaciones tienen como único objetivo privar de sus propiedades a los productores rurales” (2). Condenado en 2002 por “desobediencia a la justicia” e “incitación al crimen” después de haberles negado a técnicos del INCRA el acceso a sus propiedades, Ferreira fue puesto en libertad al año siguiente por el tribunal regional de la región VI, la misma instancia que condenó en juicio de apelación al ex presidente Lula.

“Brasil es un país muy violento, con una cantidad récord de homicidios; pero, tradicionalmente, no conocíamos este fenómeno en la política, a diferencia de Colombia o México”, analiza Mauricio Santoro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Río de Janeiro. “El mes en el que le dispararon a la caravana de Lula, fue asesinada una consejera municipal de izquierda de Río, Marielle Franco. Estos hechos trágicos son inéditos en nuestra historia contemporánea”. La violencia alcanza por primera vez a personalidades políticas de primera línea. Para los movimientos sociales no es nueva, pero está en franco aumento. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada durante la dictadura por la Conferencia de Obispos de Brasil, 70 militantes fueron asesinados en 2017, es decir, más que en 2016, que ya había marcado un récord con 61 víctimas.

Entre los 70 muertos del año pasado, 52 estaban ligados a conflictos por la tierra.

Terratenientes organizados

“El fin de los gobiernos del Partido de los Trabajadores [PT] lle-

vó a que la violencia se agravara fuertemente”, confirma José Batista Afonso, abogado de la CPT en el estado de Pará. “Se observa una reorganización de las asociaciones de grandes terratenientes y un acercamiento de los mismos con las fuerzas del orden. Esto es particularmente claro en el estado de Pará, con 21 asesinatos el año pasado. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así”. Entre estos muertos, diez campesinos que pertenecían a la Liga de Campesinos Pobres, torturados y luego ejecutados durante una ocupación del establecimiento de Santa Lucía, el 24 de mayo de 2017. Esta masacre en Pau d’Arco es la peor desde la de El dorado dos Carajás, en 1996, cuando 19 campesinos del MST fueron ejecutados por policías. La investigación llevada a cabo en Pau d’Arco acaba de concluir en la inculpación de 29 policías.

El peritaje mostró que además de heridas mortales los cuerpos presentaban fracturas múltiples, comprobando las torturas relatadas por otras víctimas. En sus declaraciones, los policías afirmaron que habían entrado a la *fazenda* (hacienda) con órdenes de arresto contra algunos campesinos y que les habían disparado. Dos de ellos, sin embargo, confesaron para obtener una reducción de pena y confirmaron la versión de los sobrevivientes. “El peritaje confirmó también que los campesinos no habían disparado. La versión de los policías por lo tanto no se sostiene”, nos buscó el procurador, Leonardo Caldas. El conflicto es clásico en este estado de la Amazonia: la *fazenda* Santa Lucía es propiedad de la familia Babinski, que cuenta con un total de 40 000 hectáreas, casi cuatro veces el tamaño de París.

Desechos clandestinos

Según los movimientos sociales, estas tierras estuvieron bien utilizadas hasta la muerte del patriarca, Honorato Babinski.

Las ocupaciones de Santa Lucía empezaron a partir de 2013, con 5694 hectáreas que ya no eran cultivadas. El heredero, Honorato Babinski hijo, de 25 años, vive en Río de Janeiro y se describe como “actor” en las redes sociales, en las que no esconde una agitada vida nocturna. Le exigió sin embargo a la justicia que expulsara a los ocupantes. A la jueza que le pidió



La ex presidenta Dilma se encuentra con el ex presidente Lula en Recife.

que demostrara la actividad de la *fazenda*, le presentó documentación (la compra de 1700 vacas y un certificado de vacunación de 75 animales), pero con fecha de un mes posterior a la petición de la justicia. Obtuvo la expulsión de los campesinos, que volvieron tres veces a ocupar el lugar. La última ocupación les resultó fatal: “La investigación ahora debe determinar quién ordenó el crimen. Pero, como sucede a menudo en el Pará, los policías hacen horas extras como agentes de seguridad para los *fazendeiros*”, agregó el procurador, para explicar su pesimismo en cuanto a las revelaciones que puedan esperarse de la investigación.

Los policías del Pará también les venden sus servicios a empresas mineras. En Barcarena, la asociación Cainquiama denunció en múltiples oportunidades que la multinacional minera *Norsk Hydro*, presente en cuarenta países y en 34.3% propiedad de Noruega, arroja residuos tóxicos. *Norsk Hydro* posee en Barcarena “la refinería de aluminio más grande del mundo”. El 23 de febrero la asociación volvió a notificarles a las autoridades acerca de desechos clandestinos, negados por la mina, pero confirmados por las autoridades sanitarias locales. Les mostró a las autoridades los vertidos clandestinos de desechos, forzando a la refinería a que redujera su producción en 50%. Dos semanas más tarde, uno de los dirigentes de la asociación, Paulo Sérgio, fue asesinado -el segundo en tres meses-.

Desde enero, la asociación venía denunciando las amenazas de muerte que recibían por parte de miembros de la Policía Militar, uno de los cuerpos policiales de Brasil. Desde entonces, al menos tres mujeres de la asociación denunciaron a su vez amenazas de muerte, sin obtener la menor medida de seguridad. Existe un programa de protección de los militantes, pero es ineficaz: las 683 personas que se benefician del mismo en su mayoría no reciben más que un seguimiento telefónico. Solo 14 de

ellas han sido puestas bajo protección policial. “Estamos recibiendo ataques sin precedentes -dijo Ney Strozake, abogado del MST-. En marzo, una de nuestras ocupaciones fue nuevamente rociada con productos tóxicos por los aviones de grandes terratenientes de Bahía. En el sur, varios de nuestros militantes son encarcelados con pretextos falaces. Hacer que los liberen resulta muy complicado”.

El 27 de marzo, siempre en el estado de Pará, fue arrestado el padre José Amaro. La policía lo acusa de una serie de crímenes que van del acoso sexual al lavado de dinero, pasando por la invasión de tierras. Este cura luchó junto a la religiosa Dorothy Stang, asesinada en 2005 por grandes terratenientes. Su arresto fue denunciado por todos aquellos que conocen sus acciones junto a los más pobres de la región. “Se trata de una nueva táctica que apunta a impedir el trabajo de estos religiosos -comentó el director de la Comisión Pastoral de la Tierra, Ruben Siqueira.

El asesinato de Dorothy Stang había detenido la acción de los grandes terratenientes,

debido a la atención internacional que recibió. Pero “destruir la reputación de un hombre puede ser más eficaz para bloquear su acción militante que matarlo”. A pesar de que todas las acusaciones provienen de grandes terratenientes, la justicia confirmó la detención provisoria del padre Amaro, que los combatía. Amenazado de muerte en múltiples ocasiones, el religioso ahora se encuentra en la misma prisión que el asesino de Dorothy Sang, en el estado de Brasil más peligroso para los militantes. La justicia no ve allí ningún inconveniente. 7

* Este artículo fue originalmente publicado en *Mundo Diplomático*, en mayo del 2018.

Notas: 1. Carol Proner, Gisele Cittadino, Gisele Ricobom y João Ricardo W. Dornelles, *Comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula*, Canal 6 Editora, Bauru, SP, 2017. 2. *Diário do Centro do Mundo*, 25 de marzo de 2018, disponible en el vínculo www.diariodocentrodomundo.com.br.

La protección y el poderío de los terratenientes

Anne Vigna Periodista Traducción: Leandro Bonecini sociólogo del CPDA/UFRJ

Una gran reunión ocurre todos los martes en un hermoso hospedaje de un barrio de alto nivel de Brasilia. “Es un almuerzo y el menú cambia cada semana”, explica el encargado de comunicación de la “bancada ruralista”, es decir el grupo de los agronegocios del Poder Legislativo. En el menú no están bocadillos o menú para degustación, sino temas que ese grupo de latifundistas del Parlamento discuten en una sala cerrada para luego llevar al Congreso o al Palacio de la Presidencia, Planalto.

“Es exactamente eso: ellos discuten con qué salsa van a devorar los derechos indígenas o la reforma agraria”, ironiza Alceu Castilho, responsable por el *De Ojo en los Ruralistas*, un observatorio de la industria agroalimentaria en Brasil. Desde la llegada de Michel Temer a la Presidencia en 2016, la bancada parlamentaria ganó una influencia inédita. ¿El mérito? Haber contribuido con la mitad de los votos del Congreso que destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff. Confrontado con una impopularidad abisal (menos del 5% de los brasileños se dicen satisfechos con su gobierno), Temer no podría mantenerse en el poder sin el apoyo de los ruralistas. Y de hecho el presidente es invitado con frecuencia al almuerzo de los martes.

En estos dos años, “el presidente tiene nos ha atendido plenamente, eso es verdad. Pero todavía hay muchos obstáculos para

superar”, evalúa João Henrique Hummel, director del Instituto *Pensar Agro*, anfitrión de esos almuerzos. *Pensar Agro* es un “think tank sin fines de lucro” que agrupa a las cuarenta principales organizaciones agrícolas en Brasil, todas también sin “fines de lucro”, resalta Hummel. El instituto financia las actividades del grupo parlamentario ruralista, elabora propuestas y analiza los proyectos de ley. Acerca de los “obstáculos”, Hummel recuerda “dos retrocedidas de Temer” en estos dos años. La primera vez que renunció a la directiva de abolir la calificación de “trabajo esclavo”, conforme a la reivindicación de los ruralistas. En nombre de esa cualificación, en 2017, el Ministerio de Trabajo liberó a 2264 trabajadores de 165 empresas que los mantenían en “condiciones análogas a la esclavitud”, especialmente en latifundios. La segunda vez fue cuando intentaron liberar la minería en una de las reservas amazónicas más importantes, la “Reserva Nacional de Cobre e Associados” (Renca). En ambas ocasiones, la presión internacional ha forzado el retroceso. Una lástima para los amigos de Hummel, que se consuelan en constatar que el presidente cumplió trece de los diecisiete “temas prioritarios” que pautaron en el Congreso.

Esta lista de “reclamaciones” comprende en primer lugar los obstáculos a la expansión territorial del agronegocio, en particular en la Amazonia. La palabra clave de los ruralistas en este campo es

“flexibilización”: la de los análisis preliminares de las concesiones de exploración (sean de minería o agrícolas), pero también la obligación de realizar estudios de impacto ambiental.

También reclamaron una ley que permita a las empresas extranjeras adquirir tierras sin limitaciones -que, de hecho, se ha implementado - y desean que los “obstáculos históricos” a sus negocios sean suprimidos: los derechos indígenas y de comunidades *quilombolas*, además de la obligación por parte del Estado de emprender una reforma agraria ante la desigualdad de la propiedad de las tierras en Brasil. Victoria: no sólo el gobierno de Temer propuso una reforma constitucional para el cambio de las reglas de demarcación de tierras indígenas de comunidades *quilombolas*, sino que también amputó el presupuesto de dos organismos públicos esenciales, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Desde su llegada a la presidencia, Temer suprimió el Ministerio de Desarrollo Rural, que aplicaba políticas favorables a los pequeños agricultores. Una nueva ley limita la reforma agraria y prevé la regularización de tierras adquiridas a un precio muy inferior a los vigentes en el mercado -práctica histórica entre los terratenientes. “Esa ley es una gran derrota para la democratización de la propiedad tierra”, resume Julianna Malerba, doctoranda en Planificación Urbana en la Universidad Federal del Río de Janeiro. “Cambia completamente las reglas y provoca una concentración aún mayor. Además, permite amnistías fiscales y reducciones de deudas a los terratenientes”, puntualiza.

Hace dos años, el ministro de Agricultura es “el mayor de los ruralistas”: Blairo Maggi, conocido en Brasil como “rey de la soya”, propietario del grupo Amaggi y el mayor productor mundial de la *commodity*, citado en los *Panamá Papers* por haber montado con el grupo Louis-Dreyfus una empresa súper rentable en las Islas Caimán. “Este gobierno suprimió toda la reglamentación ambiental para la agricultura, de semillas transgénicas a insecticidas”, explica Carlos Frederico Marés de Souza Filho, profesor de derecho agrario. “Y el marco legal ya era limitado. La ley permite, actualmente, el uso de plaguicidas prohibidos en su país de origen”.



El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General, esta vez por formación de banda criminal.

Con 235 diputados de 513 en total, y 27 senadores de 81, la bancada ruralista es muy emprendedora. De su autoría están iniciativas que aumentarían la violencia en el campo si fueran aprobadas: un proyecto de ley legalizando la portación de armas por parte de productores rurales; otro que propone inscribir el MST y otros movimientos de trabajadores del campo en la lista de las “organizaciones terroristas”...

Los ruralistas también dirigieron dos Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) sobre el Incra y la Funai. Estas comisiones piden que la justicia investigue a 96 personas (antropólogos, responsables de ONG nacionales e internacionales, fiscales, jueces etc.), acusadas por ellos de “fraudes en la demarcación y homologación de tierras indígenas”. “El Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en los procesos de criminalización de los movimientos sociales”, se inquieta Layza Queiroz Santos, abogada del Comité Brasileño de Defensa de los Derechos Humanos. “Si la relación de fuerzas en-

tre progresistas y conservadores no se equilibran en el Congreso que será elegido este año, la violencia en el campo va a recrudecer”.

Mientras el gobierno Temer se abre para los agronegocios, casi 4 millones de campesinos permanecen sin tierra en Brasil, en un territorio con 66 mil latifundios improductivos, que representan 175 millones de hectáreas (un área ligeramente inferior al territorio de México, 196 millones de hectáreas). “Esos números son estimados hacia abajo”, resalta Marés de Souza Filho. “Los criterios que miden la productividad son de 1975. Si la miseria de los campesinos no se toma en cuenta, los conflictos se van radicalizar”.

El número de brasileños que viven en estado de extrema pobreza aumentó en 11.2% entre 2016 y 2017, pasando de 13.34 millones a 14.83 millones de personas -sujetos que jamás participan del almuerzo de los martes. 🐾

Este texto fue publicado originalmente en *Le Monde Diplomatique Brasil*, en mayo de 2018.



Indígenas de Brasil, inermes ante el lobby de la agroindustria.

FOTO: Viacampesina

Con 235 diputados de 513 en total, y 27 senadores de 81, la bancada ruralista se muestra bastante emprendedora. De su autoría hay iniciativas que aumentarían la violencia en el campo si fueran aprobadas: un proyecto de ley legalizando el porte de armas por productores rurales; otro que propone inscribir el MST y otros movimientos de trabajadores del campo en la lista de “organizaciones terroristas”.

La política evangélica y el pánico moral

Karina Bárcenas Barajas

Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM

kb.barcenas@gmail.com

Desde la llegada de Michel Temer como presidente interino de Brasil, la garantía de los derechos humanos quedó en entredicho. El 12 mayo de 2016 Temer anunció que los ministerios de las Mujeres, de Igualdad Racial, de la Juventud y los Derechos Humanos se transferirían al Ministerio de la Justicia y la Ciudadanía. Para el 10 de junio se informó la suspensión por 90 días de actos de gestión en dicho ministerio, lo cual afectaba el funcionamiento y actuación de programas relacionados con la protección de víctimas y testigos, así como de los defensores de derechos humanos.

Desde que Temer tomó protesta como presidente, quedó claro el peso de la política evangélica en su gobierno. Ese día, luego de su discurso, se reunió con parlamentarios evangélicos para una oración en la que el diputado João Campos, del PRB/GO, le leyó el pasaje de la biblia en el que el rey David pasa el trono para su hijo Salomón: “sé fuerte y valiente y haz la obra, no temas, porque el señor tu Dios, y mi Dios, ha de estar contigo” (Pacheco 2017¹).

Durante la presidencia de Michel Temer las alianzas con la bancada evangélica se convirtieron en moneda de cambio al mismo tiempo que han sido clave para mantenerse en el poder. Por ejemplo, en agosto de 2017 la bancada evangélica votó a favor de que Temer se mantuviera en su cargo. El coordinador del Frente Parlamentar Evangélico, Hidekazu Takayama, diputado del PSC/PR, afirmó que fue Dios quien le mandó votar a favor de Temer, salvar a Temer, sería salvar a Brasil (Ribeiro 2017²).

Sin embargo, en el fondo, lo que los parlamentarios evangélicos obtienen de esta alianza es la potencialización de su actuación jurídica, política y simbólica, para regular la moral sexual contemporánea, frenando derechos y libertades que se han conquistado desde el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual y que deberían estar garantizados en un estado laico. Además de que esta coyuntura ha encontrado eco en un movimiento, con tintes globales, en contra de lo que se ha denominado como “ideología de género” y que ha desatado un

pánico moral que, de acuerdo con Roger Lancaster (2011: 23³), puede ser definido como cualquier movimiento de masas, que surge como respuesta a una amenaza moral falsa y que tiene como lógica central el tabú.

El pánico moral construido alrededor de la “ideología de género” es importante si consideramos que Brasil ocupa el primer lugar en crímenes por homofobia y transfobia. Hasta septiembre de 2017 se habían registrado 277 homicidios por homofobia y transfobia. A este contexto se suma el hecho de que en el año 2016 fueron registradas 133 061 denuncias por violación de derechos humanos, es decir, 364 casos por día. Del total de denuncias del año 2016, 190 están relacionadas con la orientación sexual e identidad de género de jóvenes LGBT (Fernandes 2017B⁴).

Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirman que Brasil es el país latinoamericano en el que más ha crecido el número de evangélicos. De acuerdo con este organismo el número de evangélicos pentecostales aumentó en el decenio del año 2000 al año 2010 en casi siete puntos porcentuales, ya que de ser el 15.4% de la población pasaron al 22.2%, lo que representa 42.3 mi-

llones de personas. Es importante señalar que aún cuando los evangélicos son el grupo religioso más conservador, no representan un sector homogéneo, ya sea a través de la política evangélica (legislativa, de la sociedad civil, y al interior de las iglesias), o de sus creyentes.

Sin embargo, en el escenario contemporáneo, con una sociedad más o menos secularizada, con ciertos avances jurídicos y en políticas públicas para las personas LGBT, la política evangélica pretende frenar estos cambios, que se traducen en un cambio sociocultural, y desde lo legislativo deshabilitar algunos de los pilares del estado laico: 1) la libertad de expresión y de creencias religiosas, 2) el derecho a la educación laica y 3) el derecho al matrimonio igualitario y la adopción homoparental; en algunos casos utilizando el poder legislativo como una forma imposición autoritaria, no democrática, legitimada a través del pánico moral que representa la “ideología de género”.

Si consideramos que las propuestas legislativas de los diputados evangélicos trascienden a los medios de comunicación y a las redes sociodigitales, en algunos casos, colocándose como tema de opinión pública, estos discursos legislativos que, a través de argumentos



La política evangélica pretende frenar, desde lo legislativo, algunos pilares del estado laico.

seculares, disfrazan una ideología religiosa, contraria a la diversidad sexual y de género, se convierten también en recursos para el pánico moral en una sociedad tan polarizada en estos temas, como la brasileña.

La escuela y la familia representan dos de las instituciones más importantes en las disputas de la política evangélica para regular la moral sexual contemporánea. Son sus espacios predilectos para hacer frente a lo que definen como la impo-

sición de la “ideología de género”. En el 2016 el senador evangélico Magno Malta (PR/ES) colocó en la opinión pública una propuesta de proyecto de ley para incluir en las bases de la educación nacional el programa “Escuela Sin Partido”, que pretende colocar el derecho de los padres a educar a los hijos por encima de la educación laica.

Mientras que, en el 2017, el Ministerio de Educación (MEC), decidió quitar la homofobia de la lista de prejuicios que de- ➔



Brasileños retomen el poder.



Fuera Temer.

→ ben ser combatidos con la educación, también se eliminaron los fragmentos que contenían los términos “identidad de género” y “orientación sexual”. La invisibilización de la diversidad sexual en la educación, realizada por el MEC, ya había sido buscada en varios proyectos de ley en años anteriores.

La aprobación de las terapias de reorientación sexual, conocidas como “cura gay”, y la criminalización de la expresión de género, también han sido temas centrales para la política evangélica durante la presidencia de Michel Temer. Desde 2016 se intentó avanzar en la aprobación de las terapias de reorientación sexual a través de

varios proyectos de ley, argumentando que su prohibición atenta contra el libre ejercicio de la profesión y que existe un discurso ideológico que ha convencido a gran parte de la población brasileña de que no se pueden tratar los trastornos relacionados con la orientación sexual.

Sin embargo, fue hasta el 15 de septiembre de 2017, que el juez Waldemar Cláudio de Carvalho, de Brasilia, Distrito Federal, respondió a una acción interpuesta por la psicóloga Rozangela Alves Justino, con lo cual se autorizó que los psicólogos pudieran hacer terapias de conversión sexual. Desde la perspectiva del juez, no impedir a los profesionales de promover estu-

dios de sus servicios profesionales, de forma reservada, pertinente a la (re) orientación sexual, les garantiza la plena libertad científica que está asegurada en la constitución, así como la plena realización de la dignidad de la persona humana⁵.

Un recurso interpuesto por el Consejo Federal de Psicología (CFP) para impedir esta medida fue ignorado por el juez Waldemar Cláudio de Carvalho en el D. F., además de que, el 15 de diciembre de 2017, el mismo juez ratificó su decisión, pero restringiendo las terapias de reorientación sexual para fines de investigación científica.

En relación con la criminalización de la expresión de género, también

desde algunas acciones legislativas, diputados evangélicos han intentado prohibir el uso de baños públicos para las personas con expresión de género distinta a su sexo biológico. Sin embargo, una batalla importante que ganaron las personas trans fue el hecho de que desde enero de 2018 pueden hacer uso de su nombre social en las escuelas de educación básica de Brasil.

La censura a las expresiones artísticas con temática LGBT también ha caracterizado la presidencia de Michel Temer. Uno de los casos más conocidos fue la clausura anticipada de la exposición “Queermuseu-Cartografías de la Diferencia en el Arte Brasileño”, realizada en el Centro Cultural Santander de Porto Alegre, por sus supuestas referencias a la pedofilia, prácticas sexuales explícitas y profanación de símbolos religiosos. Por este caso, el diputado evangélico Sostenes Cavalcante Silva (DEM/RJ) presentó siete requerimientos de comparecencia para que cuatro integrantes del equipo artístico y de producción, el presidente del Banco Santander Brasil, el presidente del Consejo de Administración del Banco Santander Brasil y el Secretario de Fomento e Incentivo a la Cultura, esclarecieran ante la Comisión de Fiscalización Financiera y Control (CFFC) de la Cámara de Diputados para explicar la utilización de recursos públicos para esta exposición. Otro caso fue la prohibición, en algunas ciudades brasileñas, de la presentación de la obra “El Evangelio según Jesús, Reina del cielo”, protagonizada por una actriz transexual.

Un artilugio más, que destaca como parte de la política evangélica durante la presidencia de Michel Temer, son los proyectos de ley relacionados con la profanación de los símbolos religiosos, los cuales, en el fondo, revelan una gran intención de censura a la libertad de expresión para las perso-

nas LGBT, argumentando la burla por creencia o función religiosa o la difamación de actos u objetos de culto religioso. Tan solo durante el año 2017 se presentaron tres proyectos de ley con este propósito, los cuales, en el fondo revelan prácticas jurídicas que impactan en la conformación de una ciudadanía religiosa.

En octubre de 2018, Brasil tendrá elecciones presidenciales. El candidato que, hasta el momento, encabeza las encuestas, Jair Bolsonaro, también pertenece al Frente Parlamentar Evangélico, por lo que, de llegar a la presidencia, la política evangélica neoconservadora en temas de moral sexual podría encontrar en él un nuevo aliado. En este contexto, siguen siendo necesarias y urgentes las alianzas que, desde las resistencias parlamentarias, ciudadanas y de la sociedad civil, sigan luchando por mantener los principios de un estado laico en el que se encuentren garantizados derechos y libertades para mayorías y minorías. 

1 Pacheco, Ronilso. (2017), “Para sustentar Temer, bancada evangélica usa igrejas e rebanhos em meio ao caos”. *The Intercept Brasil*. Recuperado de theintercept.com/2017/05/22/para-sustentar-temer-bancada-evangelica-usa-igrejas-e-rebanhos-em-meio-aos-caos/ el 22 de mayo de 2017.

2 Ribeiro, Tadeu. (2017), “Maioria da bancada evangélica vota a favor de Michel Temer”. *Blastingnews*. Recuperado de br.blastingnews.com/politica/2017/08/maioria-da-bancada-evangelica-vota-a-favor-de-michel-temer-001903005.html el 3 de agosto de 2017.

3 Lancaster, Roger. (2011), *Sex Panic and the Punitive State*. Los Angeles: University of California Press.

4 Fernandes, Marcella. (2017 B), “133 mil: Este foi o número de denúncias de direitos humanos em 2016 no Brasil”. *Huffpost*. Recuperado de: www.huffpostbrasil.com/2017/04/12/133miledenunciasdedireitoshumanosem-2_a_22037193/?utm_hp_ref=brlgbt el 4 de diciembre de 2017.

5 Betim, Felipe. (2017), “Cura gay: o que de fato disse o juiz que causou uma onda de indignação”. *El país Brasil*. Recuperado de: brasil.elpais.com/brasil/2017/09/19/politica/1505853454_712122.amp.html el 19 de septiembre de 2017.



Congreso Nacional.

En el escenario contemporáneo, con una sociedad más o menos secularizada, con ciertos avances jurídicos y en políticas públicas para las personas LGBT, la política evangélica pretende frenar estos cambios, que se traducen en un cambio sociocultural, y desde lo legislativo deshabilitar algunos de los pilares del estado laico: 1) la libertad de expresión y de creencias religiosas, 2) el derecho a la educación laica y 3) el derecho al matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

¿Qué se puede hacer en 2 años? La crisis y los campesinos

Debora Lima

Hay muchos intelectuales y políticos convencidos de teorías sociológicas que afirman que muy poco se puede cambiar o hacer en tan solo dos años. Pero Brasil logró destruir en los 2 años pasados, desde que se quitó a la presidenta Dilma Rouseff, muchas conquistas sociales de décadas, logradas con luchas y sangre de indígenas, campesinos y afrodescendientes.

La violencia en el campo ha sido sistemática y avasalladora, desde el desmantelamiento de las políticas agrícolas y agrarias brasileñas —que, por supuesto, no empezó ahora— hasta asesinatos y masacres de campesinos, indígenas y afrodescendientes, representantes o no de movimientos sociales del campo. De acuerdo con el informe de *Global Witness* del año 2017, Brasil es lo país más peligroso para defender los derechos de la tierra y la naturaleza: han ocurrido 448 asesinatos. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), registró en 2017 más de 70 asesinatos —la cifra más alta desde 1985— y más de 105 mil familias afectadas por conflictos agrarios. Solo en el año de 2016 se registraron 1536 conflictos. Las zonas que más concentran conflictos son justamente las de expansión del agronegocio —en el bioma Cerrado (o *savanas* brasi-

leñas) y la Amazonia, en el centro y norte del Brasil

En abril de 2017, el presidente Michael Temer (que actualmente tiene cerca de 90% de desaprobación popular) autorizó la acción de las fuerzas armadas contra manifestaciones. En ese mes, 29 policías mataron a 11 campesinos en el estado de Mato Grosso, bajo el mando de dueños de tierras y saqueadores de madera amazónica. En mayo, en Pará, nueve campesinos fueron asesinados. En Bahía, 6 líderes *quilombolas* (afrodescendientes) fueron asesinados en agosto. En Rondônia, 3 más. En el estado de Maranhão, 22 indígenas Gamela son torturados. Toda esta violencia con marcas de crueldad deja claro que el actual gobierno (patriarcal, blanco, elitista, conservador) no dejará espacios para manifestarse por una sociedad más justa, por un reparto agrario, por la diversidad de la naturaleza.

El ideal del Estado es el sistema latifundista, o sea, concentrador de tierras y de monocultivos para el abastecimiento del mercado mundial, priorizando los cultivos de *commodities*, eucalipto, soya y maíz transgénicos, carne y recursos minerales. Así, el gobierno celebró la mayor cosecha de soya transgénica de la historia brasileña y una de las mayores de mundo:



Sistemas de riego y siembras de maíz y soya transgénica en Tocantins.

Área de Tocantins, norte de Brasil, donde hacendados buscan la propiedad de la tierra a pesar de ser una región campesina.

144 millones de toneladas en 33 millones de hectáreas sembradas en 2016/2017.

Se aumentaron las inversiones para las cosechas del calendario del agronegocio 2018/2019, totalizando cerca de 50 mil millones de dólares al paso que para los campesinos fueron mantenidos

los valores de la cosecha pasada: 7 mil millones para financiamiento de cosechas, con cortes en las políticas agrarias de apoyo (compras y regulación de la propiedad, habitación rural, créditos para mujeres y jóvenes, apoyo por compra directa de cosecha, etc.) de cerca del 90%. Además, en 2017 y 2018 el presidente cambió la Ley 13.465, favoreciendo la reglamentación de tierras ocupadas irregularmente por hacendados. Desde 2016 centenas de zonas campesinas y

campesinos están siendo despojados por el gobierno, que ahora las regala al agronegocio (nacional o extranjero). No hay ninguna tierra indígena o *quilombola* reconocida en los pasados 2 años.

Desmantelados, seguimos por los campos y las calles gritando por los que se fueron. Seguimos, con o sin esperanza, en la crisis, política, económica, ambiental, civilizatoria, humana. En la política es fácil matar. Lo difícil es crear belleza. 🌱



Cosecha de soya mecanizada en Piauí, norte de Brasil. Las haciendas tienen 15 mil hectáreas. No hay campesinos trabajando donde el cultivo es todo mecanizado.

El ideal del Estado es el sistema latifundista, o sea, concentrador de tierras y de monocultivos para el abastecimiento del mercado mundial, priorizando los cultivos de *commodities*, eucalipto, soya y maíz transgénicos, carne y recursos minerales. Así, el gobierno celebró la mayor cosecha de soya transgénica de la historia brasileña y una de las mayores de mundo: 144 millones de toneladas en 33 millones de hectáreas sembradas en 2016/2017.

Las masacres impunes contra los pueblos

Carlos Alberto Feliciano cacafeliciano@hotmail.com

De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en Brasil desde comienzos del siglo XXI más de 930 familias relacionadas con acciones de ocupación o posesión de tierra sufrieron algún tipo de amenaza, desalojo, tentativa de desalojo o expulsión.

En relación a la violencia más brutal, 684 personas fueron asesinadas en ese periodo. En promedio, cada nueve días una persona pierde la vida en la lucha por el acceso, permanencia y/o retoma de la tierra o trabajo en el campo. En el periodo de datos sistematizados por la CPT, que va de 1985 a 2017, fueron asesinadas 1813 personas en el campo: 1011 campesinos, 291 trabajadores rurales, 317 agentes de mediación y líderes y 194 entre indígenas y quilombolas (afrodescendientes).

Podemos afirmar que el 50% de las muertes en el campo en el siglo XXI (2001 a 2017) son de campesinos (331 asesinatos), otro 50% está constituido por asesinatos de agen-

tes de mediación y líderes (198 asesinatos), indígenas y quilombolas (94) y trabajadores rurales (61).

Frente a esta perspectiva, entendemos que en Brasil hay dos procesos principales de resistencia (y resistentes) territorial en los que está vinculada la violencia en el campo: la violencia al entrar o retornar a la tierra o el territorio (con derecho a la propiedad privada, familiar, colectiva o comunitaria de la tierra o reconocimiento de un mundo específico de su relación con la tierra); y la violencia por permanecer en la tierra o territorio (sea con sujetos sociales, campesinos productores de materias primas para la industria y la ciudad, campesinos productores de alimentos, la familia y/o comunidad). Los dos tipos de resistencia tendrían como punto central la lucha por una autonomía plena o relativa en relación al capital.

En la fase trágica más reciente de la cuestión agraria brasileña, el año de 2017 entró a la historia. No bastó con el aumento de los asesinatos en el año 2016, batiendo record

en comparación con 2003, el año 2017 marcó el retorno de las masacres en Brasil.

El análisis de los conflictos y ocurrencias de violencia en 2017 presenta sus particularidades: el regreso de las masacres y el repunte de la barbarie y la crueldad de estos eventos. Ese año fue marcado con el registro del mayor número de masacres desde que la CPT comenzó a registrarlos en 1985. Fueron cinco masacres con 31 muertos; desde 1998 no se registraban más de dos masacres al año.

El histórico de las 71 muertes registradas da cuenta de situaciones de humillación antes de la ejecución, como ejemplo de miedo y terror. Fueron registradas muertes con arma blanca, uso de garrotes, descuartizamiento y acciones de ejecución sistemática con tiros por la espalda, en el corazón y en la nuca. Es significativo que todas estas muertes no fueron producto de enfrentamientos, sino de emboscadas. En una de estas emboscadas, la Policía Militar del Estado de Pará realizó en 2017 la mayor



FOTOS: Diógenes Rabello

Pueblos en resistencia.

masacre, en comparación con la Masacre de Eldorado dos Carajás en 1996.

Históricamente, al revisar los datos recolectados por la CPT sobre las masacres en el campo y los análisis de investigadores, el Estado brasileño actuaba solo cuando había presión en las áreas de conflicto y cuando los casos de violencia (asesinatos individualizados y masacres) tenían repercusión nacional o internacional. A partir de la materialización de la violencia, el Estado adoptaba alguna medida de compensación, como crear un asentamiento, regularizar la posesión o demarcar tierras indígenas o quilombolas. Actualmente,

incluso con 5 masacres ocurridas durante 2017, el Estado golpista no adoptó ninguna medida.

La violencia y las masacres aumentan en Brasil y van configurando espacios brutalizados, donde el Estado brasileño renunció del control territorial a favor del capital y la clase oligárquica moderna. En este momento, no hay más posibilidad del discurso de lo posible. Esta postura legitima los actos criminales de rancheros y del capital internacional y nacional, en alianza o no, a actuar tanto en la legalidad como en la ilegalidad. Todo esto porque hay una certeza de que la impunidad es un rasgo histórico del campo brasileño. 🇧🇷

Morir en el campo brasileño

EN EL SIGLO XXI HAN SIDO ASESINADOS:

331 campesinos

198 agentes de mediación y líderes

94 indígenas y quilombolas

61 trabajadores rurales



El Estado brasileño renunció del control territorial a favor del capital y la clase oligárquica moderna.

Las venas abiertas del campo brasileño

Giane Ambrósio Alvares Abogada de la Red nacional de abogados y abogadas Traducción: Rosalinda Hidalgo



El gobierno de Temer está criminalizando a los movimientos sociales.

La injusta distribución de las tierras y los recursos naturales en el país es un problema histórico contra el cual los pueblos tradicionales y campesinos han luchado a lo largo de dos siglos.

En esta lucha por la vida y por la democratización de las riquezas, contra las desigualdades, la miseria y el hambre desde tiempos inmemoriales esos pueblos sufren agresiones del latifundio, las empresas rurales, los pistoleros y los agentes de seguridad pública. Tan solo en el periodo de redemocratización, de 1985 a 2015, cerca de 1700 personas fueron asesinadas en el campo como resultado de conflictos agrarios.

El proceso de degradación de la democracia que se ha vivido en años recientes, con el retorno del poder a manos de las viejas y nuevas oligarquías y con el avance del agronegocio hacia nuevas fronteras agrícolas, creó un terreno fértil para la expansión y el agravamiento de la violencia en el campo, generando víctimas en muy poco tiempo, como hacía años que no se veía, afectando a quienes resisten y batallan por la dignidad.

Agravando todavía más la cuestión agraria, en el Congreso Nacional la llamada bancada ruralista busca la aprobación de leyes que encubran el

trabajo esclavo, retardan o impiden la demarcación de tierras en las comunidades tradicionales, autorizan el uso indiscriminado de químicos tóxicos en la agricultura, atacan los derechos de los trabajadores y pensionados campesinos, promueven la destrucción ambiental y autorizan la concentración de tierras en manos del capital extranjero.

Con el crecimiento de la violencia, la desigualdad y la injusticia social, crece también la vieja estrategia de estigmatizar a los trabajadores y generar un discurso de odio que va siendo utilizado en la sociedad como un arma de manipulación en el imaginario popular para obtener el apoyo y legitimidad política.

“Quiero que maten a esos vagabundos del MST”, declaró recientemente el candidato del PSL a la presidencia.

Y es un hecho que va aconteciendo. Las élites agrarias brasileñas, bajo el manto de la impunidad, no demuestran ningún pudor y se sienten autorizadas a segar la vida de los pobres del campo.

De acuerdo con datos recolectados por la Comisión Pastoral de la Tierra, solamente en 2016 fueron asesinadas 61 personas en conflictos agrarios.

En el año 2017, la violencia se tornó todavía más intensa. En abril, cuando la Masacre de *Eldorado dos Carajás* cumplió 21 años, nueve campesinos fueron torturados y asesinados en Colniza, Mato Grosso. En Minas Gerais, el trabajador rural Silvino Nunes Gouveia fue muerto con diez tiros en la puerta de su casa y en Viana,

En el Congreso, la bancada ruralista busca la aprobación de leyes que encubran el trabajo esclavo, retarden o impiden la demarcación de tierras en las comunidades tradicionales, autoricen el uso indiscriminado de químicos tóxicos en la agricultura, ataquen los derechos de los trabajadores y pensionados campesinos, promuevan la destrucción ambiental y autoricen la concentración de tierras en manos del capital extranjero.

Marañón, 13 indígenas fueron gravemente heridos por la acción de hombres armados contratados pro latifundistas.

En total en el año 2017, suman 71 casos de asesinatos en medio rural, de acuerdo con el informe *Conflictos en el Campo de Brasil 2014*, presentado por la Comisión Pastoral de la Tierra.

Nuestro pasado de luchas, de rescate de la dignidad y de la memoria de indignación contra esos crímenes, no nos valió.

El abolicionista Joaqui Nabuco, en célebre discurso publicado en 1884, ya vaticinaba que nada se adelantaría en acabar con la esclavitud si permanecía intacta la estructura de la tierra que la sostenía.

Desde entonces millones de trabajadores y trabajadoras en el campo brasileño son obligados a vivir en condiciones precarias de vida, mi-

grar a otras regiones o reivindicar colectivamente la política pública de la Reforma Agraria, constitucionalmente establecida.

Con todo, en Brasil sigue siendo uno de los países con mayor tradición latifundista en el mundo y la herencia inevitable fue el retorno de los tiempos arcaicos, con la perpetuación de nuestras raíces esclavistas antidemocráticas y violentas.

La conclusión a la que llegó Jose Gomes da Silva hace casi tres décadas en el libro *Agujero negro: La reforma agraria en la constitución de 1987-88*, permanece actual: la cuestión agraria en Brasil no es justa en la repartición de tierras para los hombres.

En cuanto esa realidad no cambie, no podemos dejar de denunciarla y combatirla. 🗡️

Este artículo fue publicado el 6 de agosto de 2018 en *Além Da Lei*.



Desde el año 2017, la violencia en Brasil se ha intensificado.

Los desafíos para la agroecología frente a la concentración de tierras en Brasil

Diógenes Rabello

diogenesrabello@yahoo.com

Desde su formación, Brasil guarda características de explotación capitalista de la tierra. El resultado de este proceso es el mantenimiento de la estructura de la tierra basado en el latifundio y la concentración de la tierra, y es impulsado por alianzas entre capitalistas y latifundistas. Mientras que el agronegocio se desarrolla sobre la base de la explotación capitalista de la tierra donde la producción generada sirve para enriquecer las grandes compañías multinacionales, suprime otras formas de organización de la sociedad, como el campesinado, por ejemplo.

Por lo tanto, el campo está controlado por estructuras políticas y económicas basadas en la búsqueda del lucro a través de altos niveles de explotación de los recursos naturales. Esto genera problemas de orden social y ambiental. Por un lado, los procesos de degradación del medio ambiente se intensifican cada vez más; por otro, concentrar la tierra significa que miles de familias campesinas están en un proceso histórico de lucha por el acceso a la tierra, pues se les ha negado el dere-

cho a vivir y reproducirse en su territorio.

La convivencia entre los latifundistas y campesinos genera conflictos. Estos conflictos surgen de la lucha por la posesión de la tierra, donde muchos sujetos organizados en movimientos rurales cuestionan las estructuras dominantes de poder y luchan por la democratización del acceso a la tierra. Hay también conflictos encubiertos, que se caracterizan por las estrategias operativas de las empresas capitalistas, que extraen beneficios por la explotación de la tierra mediante el uso intensivo de pesticidas, la deforestación, el uso irracional e incontrolado de agua y otros recursos.

Para las familias y comunidades campesinas, las amenazas y los conflictos se producen, sobre todo, al momento de garantizar su permanencia en la tierra con las condiciones concretas de reproducción socio-territorial que necesitan y esto lleva a cuestionar la acción del Estado, limitada en la generación y aplicación de políticas públicas con fondos públicos para garantizar el trabajo de estas familias, y también lleva al enfrentamiento con el capital

productor de *commodities* agrícolas que amenazan y suprimen la posibilidad de trabajo de los sujetos del campo.

La agroecología en el campo de batalla

Vivimos una lucha histórica protagonizada por los sujetos del campo que producen resistencia en la tierra a partir de la agroecología. A través de la organización y las formas de agricultura basado en los principios de la agroecología, las familias que viven en el campo están cuestionando estas estructuras de poder, mientras que realzan la idea de que son los grandes responsables de la producción de alimentos sanos y diversos para la sociedad.

La agroecología se ha concebido como una forma de romper los patrones de producción y productivistas envenenados. Se le ve cada vez más como un medio para facilitar el desarrollo en el campo, para permitir la reproducción del campesinado, manteniendo el equilibrio entre el desarrollo económico, la calidad social y ambiental y el uso de buenas prácticas, que descartan el uso de pesticidas en la producción de comida sana.



Campo brasileño: campo de batalla.

FOTOS: Diógenes Rabello

La agroecología es un contra-modelo para la agricultura creada por la Revolución Verde, adoptada por el Estado, que se caracteriza por la monopolización de la tierra y el proceso de mercantilización de la agricultura basada en el monocultivo y el uso intensivo de pesticidas.

Las discusiones sobre agroecología en Brasil empiezan en la década de 1960, cuando empiezan a darse movimientos que cuestionaban la agricultura de aquel momento. Estos movimientos comenzaron a ser protagonizados por organizaciones de agrónomos que proponían debates del marco ecológico para impugnar los patrones tecnológicos de la agricultura. José Lutzemberger, ingeniero agrónomo, fue uno de los más críticos en la década de 1970 contra modelo agrícola que causa la degradación ambiental.

Uno de los marcos de este momento fue la publicación del *Manifesto Ecológico Brasileiro* (1976), de Lutzemberger, en el que presenta los efectos negativos de la mecanización de la agricultura, el cul-

tivo de semillas transgénicas y la dependencia de los plaguicidas en los cultivos. A partir de ahí, diversos trabajos eran publicados o traducidos al portugués, y comenzaron a guiar las discusiones de emergencia de una agricultura basada en la ecología, contraria al productivismo mecanizado.

Las dimensiones territoriales brasileñas posibilitan que la agroecología se desarrolle con estrategias distintas para cada región. Las divisiones regionales en Brasil mantienen especificidades geográficas y sociales únicas, y cómo cada uno se relaciona con el campo se refleja en la diversidad de temas e identidades y tipos de trabajo con la tierra para la producción de alimentos. Por eso entendemos que la agroecología es una estrategia de reproducción del sujeto del campo que se relaciona de forma específica para cada identidad y en cada territorio. En este sentido, se contraponen a la idea de los paquetes tecnológicos que entorpecen y suprimen las formas de organización del trabajo campesino. 🍌



El tamaño de Brasil posibilita que la agroecología se desarrolle con estrategias distintas en cada región.

Entre los latifundistas y campesinos genera conflictos por la posesión de la tierra. Muchos sujetos organizados en movimientos rurales cuestionan las estructuras dominantes de poder y luchan por la democratización del acceso a la tierra. Hay también conflictos encubiertos, que se caracterizan por las estrategias de las empresas capitalistas, que extraen beneficios mediante el uso intensivo de pesticidas, la deforestación, el uso irracional e incontrolado de agua y otros recursos.



Campesinas y campesinos preservan sus tradiciones tanto culturales como agroecológicas.

Defender las semillas criollas es defender la vida

Lidenilson Silva Militante y miembro de la dirección del Movimiento Campesino Popular

El Movimiento Campesino Popular (MCP) es una organización nacional, formada por hombres y mujeres brasileños cuyo papel social es la producción de alimento saludable, barato y de aporte alimenticio para la toda la sociedad a partir del rescate de semillas criollas, de acuerdo con los principios de la agroecología.

Sus objetivos son: a) avanzar en la construcción de la campesina; b) fortalecer la soberanía alimentaria y popular; y c) buscar la construcción de un proyecto popular para Brasil. La triple condición del movimiento: producción, organización y lucha social.

El movimiento se organiza en grupos de base conformados por familiares campesinos, quienes realizan círculos de discusión y se organizan por la lucha de los derechos campesinos, además de realizar las tareas de producción y estrategia de mercado.

La coordinación y dirección en diferentes instancias acontece de forma colectiva y de modo paritario entre mujeres hombres y jóvenes.

Es un movimiento de base y popular que lucha con la clase oprimida contra la explotación, bajo el precepto de que solo el pueblo

organizado puede luchar por la defensa de sus derechos. Además, es un movimiento de masas integrado por trabajadores agrícolas, que producen las riquezas en el país. Es un movimiento político que lucha, que moviliza, que organiza, que discute, que elabora propuestas de cambios estructurales de la sociedad.

Su principal característica es trabajar en la tierra, en los bosques y en las aguas, no importando si se es propietario arrendatario, pescador, pastor, etc. Apuesta a un trabajo donde las familias se formen en prácticas solidarias a través de intercambios de servicios y conocimientos.

El trabajo con la infancia campesina apuesta a una educación que revalore los modos de vida campesina, a través de la recuperación de la memoria de los saberes familiares y comunitarios, al mismo tiempo que se articulan los temas que se discuten en los encuentros y reuniones nacionales.

A partir de nuestra experiencia en el trabajo con la tierra la relación de trabajo y género es una expresión de convivencia, ya que se tiene la conciencia del uso de los bienes y recursos naturales como bienes colectivos. Este pensamiento es muy diferente frente a la ideología del agronegocio.

Nuestras experiencias en el campo de producción de alimentos saludables tienen como punto de partida la defensa, recuperación, cultivo y reproducción de semillas criollas, principalmente de maíz, mandioca, frijol y arroz. Realizamos un trabajo contra los cultivos transgénicos, agrotóxicos e híbridos, esta es nuestra batalla diaria, ya que Brasil es el mayor consumidor de venenos en el mundo. Esta defensa también la llevamos a cabo por medio de luchas y movilizaciones.

Por lo tanto, corredores agroecológicos, sistemas agroforestales, policultivos, apicultura, etcétera, son algunas experiencias desarrolladas en varias regiones de Brasil. Para el MCP defender las semillas criollas es defender la vida presente y futura frente al capital y sus oligarquías hegemónicas.



Producción de alimentos sanos.



Pueblo movilizado.

Nuestras experiencias en el campo de producción de alimentos saludables tienen como punto de partida la defensa, recuperación, cultivo y reproducción de semillas criollas, principalmente de maíz, mandioca, frijol y arroz. Trabajamos contra cultivos transgénicos, agrotóxicos e híbridos; es nuestra batalla diaria, ya que Brasil es el mayor consumidor de venenos en el mundo

Acceso a tierra, educación y ocio: los desafíos de la juventud campesina

Diego Sartorato Traducción: Pilar Troya

El 2° Campamento Nacional de la Juventud Sin Tierra tuvo lugar en Corumbá de Goiás, en el estado de Goiás en el centro del país, un estado donde la proporción de jóvenes y ancianos en el medio rural, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), es la más desigual: 17 productores ancianos por cada productor joven.

El dato es del último Censo Agropecuario, a finales de julio pasado. La investigación mostró la desproporcionalidad entre los grupos de edad de los productores rurales en Brasil: apenas 5.4% tiene menos de 30 años.

Los desafíos que la juventud enfrenta para permanecer en el campo fue uno de los temas del campamento de la juventud. Con el lema "Juventud Sin Tierra: organizando la rebeldía pro-proyecto popular", la actividad reunió a cerca de 500 jóvenes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra-MST y de otras organizaciones.

Aniele de Souza Alves, de 20 años, creció en el Asentamiento Antonio Conselheiro, en el municipio de Theobroma (estado de Rondonia, frontera con Bolivia). Ella cuenta que, a lo largo de los años, vio a muchos colegas salir de la ciudad en busca de oportunidades de empleo, principalmente a las grandes capitales.

Ane, como es conocida, estudia y ayuda a su familia en la producción de derivados de leche. Ella afirma que la gran dificultad para los jóvenes que deciden quedarse

es la falta de un sistema de educación contextualizado para las necesidades locales.

"La escuela que hay allá [en Rondonia] no está volcada hacia la realidad del campo. Si fuera una escuela donde las personas, desde niños, aprendieran que el campo es un lugar bueno para vivir y que ellos no tendrían que ir a las ciudades para trabajar, tal vez ellos no tendrían ese pensamiento", dice.

Es lo mismo que afirma Renata Menezes da Silva, del Asentamien-

to São Bento II, localizado en Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo.

"Hay muy jóvenes que salen de los asentamientos para estudiar. Eso es muy bueno para nosotros, porque es juventud formándose; pero es malo que ellos tengan que salir del asentamiento para que eso se concrete. La idea es que, nosotros, jóvenes del campo, podamos tener acceso a la educación hasta el nivel superior a partir de nuestra perspectiva", afirma la militante.

Renata defiende políticas públicas como el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA), proyecto de acceso a la educación superior para jóvenes campesinos.

El programa del gobierno federal, mientras tanto, sufrió recortes drásticos en los pasados tres años. En 2015, los recursos para el PRONERA sumaban US\$ 8.7 millones, pero, en 2017, cayeron a US\$ 3.9 millones. En 2018, el presupuesto que se destinó al programa fueron

apenas US\$ 2.06 millones— una caída de 76% comparado con 2015.

Identidad campesina

Para el joven paraibano Diones Lopes, de 22 años, el proceso del éxodo rural está relacionado con la falta de identificación de los jóvenes con el campo. El mismo pasó a identificarse como campesino cuando tuvo contacto con el movimiento popular, hace apenas tres años. Hoy, forma parte de la Pastoral de la Juventud Rural.

"Era un joven campesino que tenía la intención de estudiar para salir del campo y vivir en la ciudad porque el sistema, de cierta forma, nos impone eso desde el inicio. Después que conocí a la Pastoral, cambié esa perspectiva, me identifiqué como joven y hoy busco agregar ese espacio para que la juventud campesina pueda continuar luchando para vivir en el campo", dice.

El muchacho pondera que faltan políticas públicas volcadas hacia quienes deciden permanecer en el campo. "La juventud campesina tiene mucha dificultad de conseguir crédito juvenil, para que el joven pueda tener una autonomía financiera en el campo. Y hay otra cuestión, que es la reforma agraria. Nosotros no tenemos tierra. La mayoría de la juventud no consigue permanecer en el campo porque no tiene tierra para producir y estar en ella, viviendo allí".

"La juventud campesina tiene mucha dificultad de conseguir crédito juvenil, para que el joven pueda tener una autonomía financiera en el campo. Y hay otra cuestión, que es la reforma agraria. Nosotros no tenemos tierra. La mayoría de la juventud no consigue permanecer en el campo porque no tiene tierra para producir y estar en ella, viviendo allí."

Versión original publicada en: <https://www.brasildfato.com.br/2018/08/08/acceso-a-tierra-educacion-y-ocio-los-desafios-de-la-juventud-campesina-brasileña/>



Juventud Sin Tierra: organizando la rebeldía, pro-proyecto popular.

Neocolonialismo verde, rebeldía negra en Brasil



Los *Quilombolas* están en el proceso de retomar las tierras arrebatadas ilegalmente por las empresas productoras de celulosa.

Renata Bessi y Santiago Navarro F

Papel higiénico y toallas de primera calidad, productos suaves y blancos, son el destino principal de la celulosa brasileña extraída de los árboles de eucalipto. Un producto que abastece, principalmente, a países del primer mundo. Aunque esto ha generado impactos sociales y ambientales en tierras brasileñas, muchas comunidades jamás han tenido en sus manos un papel de ese tipo.

La región conocida como Sape do Norte, que incluye los municipios de São Mateus y Conceição da Barra, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ha sido afectada fuertemente por las plantaciones de eucalipto. En São Mateus, las plantaciones ocupan el 70% del territorio. De Vitoria, capital de Espírito Santo, a São Mateus, casi 300 km de longitud son ocupados por árboles de eucalipto. En trechos accidentados aún se ven resquicios del bosque nativo y su biodiversidad, algunas hectáreas que se recorren en escasos minutos en automóvil.

Esta área es símbolo de la resistencia negra, tierra de *quilombolas*. *Quilombo* viene de la lengua *kimbundu*, una de las lenguas bantúes más habladas en Angola. *Quilombo* se llamó a los lugares donde vivieron los esclavos rebeldes o fugitivos, que llevaban una vida de libertad, apartados de las ciudades o en el campo. De ahí viene la palabra *quilombola*, usada para referirse al negro rebelde.

“El *quilombo* llegó de África en la época colonial, se negó a ser esclavizado y encarnó la resistencia negra. Ellos construyeron comunidades, a las que llamaron *qui-*

lombos. Huyendo de la esclavitud, permanecían aislados en pequeñas comunidades de 20 a 30 familias. Sus descendientes permanecieron ahí”, dice Marcelo Calazans, de la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educativa (FASE) organización que con los impactos del eucalipto en el estado de Espírito Santo.

La emancipación de los esclavos ocurrió en 1888 y no fue acompañada de medidas que permitiesen a las comunidades negras permanecer en las zonas rurales. Un siglo más tarde se dio el reconocimiento legal de estas comunidades con la Constitución de 1988, aunque no se garantizó efectivamente el territorio *quilombo*. Pero, con o sin reconocimiento, estas comunidades sobrevivieron en las zonas rurales, como lo prueba Sapé do Norte.

En la década de 1960, con la llegada de la industria de la celulosa extraída del eucalipto, los *quilombolas* y sus familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras y

algunos se trasladaron a las grandes ciudades, donde terminaron nutriendo las favelas. Se estima que antes de que llegara la neocolonización del eucalipto, había 15,000 familias *quilombolas*. Hoy se calcula que 1200 familias se reorganizan en 32 comunidades de Sapé do Norte. Sus descendientes están dispersos en comunidades «aisladas» por plantaciones de eucalipto, sufriendo todo tipo de presiones y efectos provocados por la industria de la celulosa.

“Hubo plantaciones de monocultivos en lugares inverosímiles, en nacimientos y zonas de recarga hídrica. Se eliminaron los bosques de la ribera, se cortó el curso del agua, las lagunas fueron rellenadas con tierra, se mató la biodiversidad del bosque atlántico con plaguicidas y herbicidas, eso hizo imposible la siembra agrícola, al menos que se usaran agroquímicos”, explica a Avispa Midia Simone Batista Ferreira, investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Espírito Santo.

En los años 60, con la llegada de la industria de la celulosa extraída del eucalipto, los *quilombolas* y sus familias fueron forzados a abandonar sus tierras y se trasladaron a las ciudades, donde terminaron nutriendo las favelas. Antes de que llegara la neocolonización del eucalipto, había 15,000 familias *quilombolas*. Hoy se calcula que 1200 familias se reorganizan en 32 comunidades de Sapé do Norte. Sus descendientes están dispersos en comunidades «aisladas» por plantaciones de eucalipto, sufriendo todo tipo de presiones y efectos provocados por la industria de la celulosa.

Empresa líder mundial

La empresa Aracruz Celulosa llegó a tierras de Espírito Santo en la década de los años 1960. Estuvo constituida en un primer momento por accionistas como Souza Cruz (subsidiaria de *British American Tobacco*), la familia Lorentzen –ligada a la realeza noruega–, y el Grupo Safra, con 28% de participación de capital cada uno; el Estado brasileño era socio con las acciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico -BNDES-, que se redujo al 12%. En el año 2009 la empresa Aracruz Celulosa cambió de nombre y nace Fibria Celulosa, resultado de la incorporación de acciones de Aracruz Celulosa y Votorantim Celulose e Papel. Fibria es considerada en la actualidad líder mundial en la producción de celulosa de eucalipto. Es la única empresa del sector forestal del mundo que está en el Índice Dow Jones, cotizando en la Bolsa de Valores de Nova York.

Bosques sin vida

Un bosque sin flores, sin olor, sin animales, ningún ave vuela por este lugar. Un bosque escéptico, color verde uniforme. Árboles raquíticos, troncos delgados y altos, parecen columnas cimbradas en la tierra. En Ecuador las plantaciones de eucaliptos son conocidas como el bosque silencioso, porque no hay pájaros. En Chile les llaman bosque militar porque, además del color verde del uniforme militar, los árboles están formados y ordenados de una forma rígida. *En Brasil le llaman desiertos verdes, simplemente porque no hay vida en su entorno.*

Brasil es el cuarto productor mundial de celulosa, después de Canadá, Estados Unidos y China. De acuerdo con el informe de 2014 de la Industria Brasileira Árbol Forestal, el área forestal cultivada en Brasil llegó a 7.6 millones de hectáreas en 2013. El eucalipto representa el 72% de este total con 5 millones 474 mil hectáreas. En 2013 se produjeron 15.1 millones de toneladas de celulosa y 10.4 millones toneladas de papel. El objetivo es alcanzar una producción de 22 millones de toneladas de celulosa en Brasil en el año 2020.

La celulosa de Brasil tiene como principal destino el mercado de Europa, que recibe 41% del volumen de las exportaciones, seguido por Asia y América del Norte, con 39% y 20%, respectivamente.

Demanda internacional

De acuerdo con el economista Helder Gomes, miembro de la Red de Alerta contra el Desierto Verde, en los años 60 los mercados internacionales sufrían una presión por la demanda de pulpa y papel, por las dificultades de la ampliación en la producción de madera en los principales países productores de eucalipto.

En esa época, estudios de la FAO indicaban las dificultades para ampliar la producción en los países productores y la disponibilidad de tierras en los países centrales, el largo período de maduración y las presiones de los movimientos sociales contra el aumento de las emisiones contaminantes y contra la expansión de los monocultivos.

Esto obligó a que organismos internacionales, la propia FAO, comenzaran a subsidiar la expansión de los programas forestales en países como Brasil, donde había condiciones ecológicas favorables para el rápido crecimiento de los bosques, disponibilidad de tierra, abundancia de mano de obra barata y políticas gubernamentales que beneficiaban a esta industria.

Destrucción

Aracruz Celulosa es responsable inmediata de la destrucción de 43,000 hectáreas de selva tropical en el municipio de Aracruz, municipio que además alberga tres de las mayores fábricas de celulosa de la misma empresa.

El Informe de Evaluación de Impacto Ambiental, hecho por el Instituto de Tecnología de la Universidad del Estado de Espírito Santo para los permisos de expansión de la producción, documenta que “a través del análisis de fotografías aéreas obtenidas en los inicios de la década de 1970, se encontró que al menos el 30% de la superficie de Aracruz estaba cubierto por bosque nativo, que fue sustituido por bosques homogéneos de árboles de eucalipto”.

Aracruz devastó el bosque y expulsó a las comunidades: “De 40 comunidades indígenas que había durante los primeros años de desarrollo de esta industria, solo quedaron 6”, afirmó a Avispa Midia el abogado Sebastiao Ribeiro Filho, de la Red de Alerta contra el Desierto Verde.

Blanqueamiento tóxico

La cadena de producción de la celulosa, además de impactar la vista con el paisaje homogéneo, ➔



Selvas brasileñas arrasadas para producir papel de baño para el primer mundo.

→ también impacta el olfato. Caminando por Aracruz de pronto llega un olor ácido. “¡Es cloro!”, avisa Calazans, que explica: “para blanquear el papel se requieren millones de litros de químicos, entre ellos peróxido de hidrógeno y cloro, prohibidos en muchos países. No hay una regulación severa de su uso. Los desechos van directamente al mar”.

De acuerdo con Luiz Loureiro, ex funcionario de Aracruz, las plantaciones constantemente son atacadas por plagas que son contenidas con químicos como el glifosato o el mirex, plaguicida prohibido en todas sus formulaciones y usos, por ser dañino para la salud humana y el ambiente. “Los trabajadores mueren por envenenamiento y por accidentes y eso no se dice. No reciben orientación sobre el envenenamiento y muchas veces llevan sus ropas de trabajo a casa y son lavadas con las de sus hijos”.

Daniela Meirelles, integrante de Fase, quien da talleres a mujeres trabajadoras de la empresa de celulosa, afirma que la empresa promueve la igualdad de género dando oportunidades de trabajo a las mujeres. “Fibra, con la intención de integrar a las mujeres a la producción, promovió una política de género para contratar mujeres *quilombolas*. El detalle es que el trabajo consiste en fumigar árboles, sin la protección e información necesaria sobre los químicos usados”.

Los empleos prometidos

De acuerdo con Sebastião Pinheiro, profesor de la Universidad de Rio Grande do Sul, los desiertos verdes no generan empleos, por el contrario, destruyen las fuentes de sustento de miles de familias: “Los desiertos verdes no generan trabajo; para generar un empleo se necesitan 400 hectáreas de eucalipto. En la agricultura familiar o campesina se necesitan diez personas por hectárea. La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y los gobiernos que vienen promoviendo este cultivo, que beneficia a unas cuantas multinacionales, están provocando un genocidio económico destruyendo la agricultura tradicional y eso significa la destrucción de pueblos y comunidades enteras”.

Memoria de la destrucción

“Tengo el recuerdo del bosque atlántico. Vivíamos de la agricultura en el campo, de la caza. También recuerdo cuando llegó la empresa. La devastación no fue de árbol en árbol, fue con grandes cadenas de unos 100 metros arrastrados por tractores, devastando todo lo que había a su paso. Cada eslabón de la cadena debía pesar unos 100 kilos. Había árboles con diámetros enormes que no resistieron las grandes cadenas. Vi muchas cosas monstruosas que la empresa hizo. Yo vi sin saber, sin conocer las consecuencias y ahora estamos pagando el precio”.

El Ministerio Público de la Federación en noviembre de 2014, como medida cautelar suspendió una de las líneas de financiamiento de Fibria, la del BNDES para la zona *quilombola* del norte de Espírito Santo.

Fibria está siendo acusada de fraude en la obtención de tierras para sus plantaciones. Según la demanda, a principios de 1970, antiguos funcionarios de la empresa se autonombraron como pequeños agricultores ante el gobierno del estado de Espírito Santo, con el fin de obtener títulos de dominio de terrenos «baldíos». Después, los empleados transfirieron estos títulos de propiedad, de terrenos ubicados entre Conceição da Barra y São Mateus, a Fibria. El período en que las áreas permanecían como patrimonio de los funcionarios no duraba ni una semana.

Quilombolas resisten al eucalipto

¿Qué hizo mal este pueblo? ¿Lo que hizo este pueblo mal así?

Estas preguntas son parte de una canción cantada por los negros en la época de la esclavitud y que los *quilombolas* de la Barra da Conceição mantienen como una tradición en el ritual *Ticumbi*. En la canción preguntan a San Benito las causas de tantas pérdidas: de su territorio, los bosques, los campos, el agua.

Hoy la canción tiene otra dimensión en la voz de Souza, maestro *Ticumbi*. Una dimensión de resistencia. La cultura de sus antepa-

sados sirve para resistir las nuevas formas de esclavitud, la neocolonización del eucalipto. “Somos comunidades aisladas por el eucalipto y estamos aquí resistiendo”, dice Souza, quien cuenta que su padre, entre 1960 y 1970 fue expulsado dos veces de sus tierras, de donde obtenía la subsistencia para su familia. “Las personas que reclamaban ser los propietarios de estas tierras aparecían y hacían presión para que saliéramos. En ese momento teníamos miedo y salíamos. Era más difícil de afrontar. Y fue así que estas tierras fueron transferidas a la empresa [Aracruz]”.

La resistencia ya no es suficiente, dice Vando Falcão Souza, hijo de Souza, es necesario avanzar: “No tenemos tiempo que perder. Nuestro camino a seguir contra el eucalipto es volver a la tierra que fue de nuestros antepasados y continuar plantando alimentos”, sostiene.

Angelim I es una recuperación de tierras hecha por familias *quilombolas*. Después del corte de los árboles realizado por la empresa, las familias regresaron a la tierra y comenzaron un proceso de recuperación del suelo. “Después de 40 años de plantar eucaliptos en el mismo lugar, un proceso de transición es necesario. La tierra está muy seca, llueve y el agua desaparece. Muchos decían que no íbamos a ser capaces de plantar nada, pero estamos viendo que con paciencia y mucho trabajo es posible. En unos cinco años podemos hacer que la tierra sea como era antes del eucalipto”, dice Falcão.

Ya comenzaron a florecer nuevas plantas, que llaman la transición al post-eucalipto. Generalmente empiezan con plantas como la sandía, yuca, calabaza y frijol. “El maíz y el café aun no crecen. Nosotros ya estamos cultivando varias especies de frijoles y estamos empezando a comercializar en los pequeños mercados de la comunidad. La intención es formar un tipo de cooperativa”, dice Falcão.

Saliendo de las Senzalas

A pocos kilómetros de Angelim I existe otra recuperación de tierras, Linharinho. Allí, en el esfuerzo de transición se aplica la agroecología. “Después de limpiar la tierra del eucalipto la técnica es plantar árboles del bosque nativo traídos de otros lugares, y alrededor de estos árboles otros cultivos, como el frijol y la calabaza. Así vamos a reconstruir el bosque y la cosecha al mismo tiempo. El proceso es lento, llevará seis o siete años para que los animales silvestres vuelvan y se recuperen las aguas”, dice Antonio Rodrigues de Oliveira.

Rodrigues cuenta que llegó a estas tierras con pocos recursos, con el rostro en alto, sus manos y el coraje necesario. “No podemos esperar nada del gobierno, ni de la empresa, ni de nadie. Tenemos que tomar el azadón, entrar en la tierra, construir una choza, hacer un pozo... sacar agua, incluso empujando con un burro si es necesario. Morir de hambre nunca más... Vamos poco a poco porque no tenemos infraestructura, pero lo haremos”, sostiene y agrega que la situación es difícil y recuerda que la empresa llegó a plantar eucaliptos hasta en el cementerio donde estaban sus abuelos. “No dejaron casi nada, sólo algunos roedores que se adaptaron, cerdos salvajes y armadillos viviendo como vivimos, migrando y buscando lo necesario para subsistir”.

No duda en comparar la situación de su comunidad con la de sus antepasados. “Estamos haciendo lo que hicieron nuestros antepasados. Huyeron de los lugares de la esclavitud, conocidos como Sensala [donde los esclavos estaban presos en granjas] y crearon condiciones de vida en

lugares aislados. Abrieron claros e hicieron producir la tierra. Aquí es un *quilombo*, lugar de la liberación”, sostiene Rodrigues, quien ha trabajado en varias fincas y experimentó la migración hacia las grandes ciudades.

Cultura de transición

Dentro de la industria de la celulosa lo que marca la velocidad es la cantidad de troncos de eucalipto que entran todos los días. La maquinaria necesita fibra de celulosa homogénea para operar a la máxima potencia, para esto debe prevalecer la homogeneización: terreno plano, árboles largos, delgados y sin ramas. La tierra debe estar libre de impedimentos, la diversidad es un obstáculo.

João Guimarães, otro *quilombola* de Angelim I, dice que es necesario construir un conocimiento que permita convertirse en una cultura de la transición post-eucalipto. “Ya no podemos vivir lamentando la desaparición del río y el manantial de agua que murió y los árboles que desaparecieron, los pájaros que se han ido. El bosque atlántico que se fue, lo tenemos que recuperar. Estos 40 años de plantaciones de eucalipto no se olvidan de la noche a la mañana, tenemos que trabajar duro, experimentar cómo vamos hacer esta recuperación, con ensayo y error, para construir una transición del conocimiento”.

Esta es la primera generación que está retomando las tierras para la producción de alimentos. Las tierras retomadas son parte de este proceso; están sirviendo para crear este conocimiento. “Vivimos cierta tensión debido a que estas tierras están en disputa y nos pueden desalojar en cualquier momento. Pero no tenemos opción. Nuestra forma de insurgencia es plantar alimentos con nuestras hoces y azadones. De forma lenta, pero recuperando la tierra y nuestra independencia”.

Lucha por la memoria

Una de las controversias que está en juego es el recuerdo del bosque atlántico y su transmisión a las generaciones más jóvenes. “Tal vez en 100 años un *quilombola* mirará las plantaciones de eucalipto y dirá que es un bosque, porque no va a tener la referencia de lo que es un bosque nativo”, dice Calazans. “La empresa sabe que si rompe esta memoria ya no tendrá resistencias”.

“Hubo plantaciones de monocultivos en lugares inverosímiles, en nacimientos y zonas de recarga hídrica. Se eliminaron los bosques de la ribera, se cortó el curso del agua, las lagunas fueron rellenadas con tierra, se mató la biodiversidad del bosque atlántico con plaguicidas y herbicidas, eso hizo imposible la siembra agrícola, al menos que se usaran agroquímicos”.

El artículo completo esta en Avispamedia

<https://avispa.org/neocolonialismo-verde-rebeldia-negra-en-brasil>

Los impactos posgolpe en personas afectadas por las represas

Movimiento de afectados por represas en Brasil



El Movimiento dos Atingidos por Barragens busca fortalecer la resistencia de las familias afectadas por represas.



Movilizarse contra el desmantelamiento de las políticas sociales.

Vivimos un desmantelamiento intensivo de las políticas sociales a partir del golpe contra la democracia perpetrado en Brasil a partir de 2016. La ofensiva ocurre en medio de la crisis del capitalismo mundial, que para mantenerse y mantener los altos niveles de explotación y lucro adopta medidas cada vez más violentas sobre los territorios y sus poblaciones.

En Brasil esto se expresa en medidas relacionadas con la apropiación indebida de recursos naturales para extracción de valor, modificaciones en las leyes laborales, la aprobación de una enmienda constitucional que congela gastos en salud y educación pública por 20 años y los esfuerzos para privatizar empresas públicas de sectores estratégicos como el agua, la energía eléctrica y las reservas de petróleo del Pré-sal (reserva descubierta en 2007, durante

el gobierno del ex presidente Lula, que se convirtió en la mayor reserva de la historia del país). Estas privatizaciones tienen consecuencias que los trabajadores y trabajadoras sienten día a día, como el aumento de las tarifas de agua, gas de cocina, energía eléctrica, combustible y alimentos.

Muchos grupos económicos que patrocinaron a los movimientos y legisladores del golpe son los mismos que hoy se están apropiando de las riquezas del pueblo brasileño. En el caso del agua y la energía eléctrica –generada básicamente por hidroeléctricas– el gobierno y los sectores golpistas que lo apo-

yan están intentando privatizar la mayor estatal de energía eléctrica de América Latina: Eletrobrás. En caso de que esa entrega se concrete, la empresa privada que gane la concesión tendrá sobre su control 47 hidroeléctricas y sus respectivos lagos de reserva, acceso a los cursos de agua y las áreas de monte cercanas a los reservorios, inclusive en la Amazonia y el río São Francisco, uno de los más importantes del país.

La estrategia de privatización tiene como objetivo crear un gran “mercado del agua”, imponiendo el cobro por el uso del agua de ríos y lagos, comenzando por las zonas de mayor conflicto (nordeste del país y el estado de São Paulo). Para cumplirlo, están en curso varias medidas que buscan cambiar la legislación brasileña para garantizar la privatización y la cobranza de servicios sobre toda la población. Al mismo tiempo, el Estado está garantizando –a través de la flexibilización de leyes ambientales– las condiciones para favorecer a las empresas privadas en la implementación de nuevos proyectos, sin que haya muchos “estorbos” (como ellos llaman) en el proceso.

Actualmente, y en función de la crisis capitalista, la construcción de proyectos hidroeléctricos no está a la orden del día. Pero para los empresarios el momento exige preparación previa de condiciones para nuevas usinas, y la extensión a nuevas áreas como los proyectos eólicos y solares, la minería y la explotación del litio (materia prima para baterías recargables y de almacenamiento de energía eléctrica, bastante abundante en Brasil), lo que generará nuevas poblaciones afectadas y profundizará los conflictos y la violación de derechos.

A esto se suma la represión contra los afectados y afectadas por represas en defensa de sus derechos a través de amenazas, criminalización y asesinato de líderes que apoyan y actúan en defensa de las causas populares. La impunidad en estas situaciones prevalece, como también en relación a los crímenes sociales y ambientales cometidos por las grandes corporaciones, como es el caso del cri-

men de la cuenca del Río Doce, cometido en 2015 por la empresa Samarco, propiedad de Vale y BHP Billiton y que dejó 19 muertos, borró del mapa comunidades y generó una destrucción total en la biodiversidad de la región. Los afectados y afectadas todavía buscan ser reconocidos e indemnizados, sin éxito hasta ahora. Lo mismo acontece con las familias afectadas por Belo Monte en Altamira, en la región amazónica y en tantas otras grandes obras de infraestructura.

Para enfrentar esta situación, el Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB) busca a través de su plano de luchas influenciar y fortalecer la resistencia de las familias afectadas por represas en su lucha por sus derechos históricamente negados. El acceso a indemnizaciones justas, la retoma de los territorios, el derecho a la información y consulta previa sobre los proyectos, políticas públicas y sociales, acceso al agua y la energía eléctrica, en suma: una vida digna. En las luchas generales, nos sumamos a la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, en defensa de la soberanía nacional, contra las privatizaciones, contra las altas tarifas, y construyendo de esa manera las bases para un proyecto energético popular. Nos sumamos también al Frente Brasil Popular para luchar por la democracia, contra el golpe y por cambios estructurales que garanticen una mejor calidad de vida para todo el pueblo brasileño.

A nivel internacional, nuestro esfuerzo está enfocado en sumar a la lucha de los afectados por represas de otros países, sobre todo de América Latina. Para eso, construimos en conjunto con varias organizaciones de 14 países el MAR (Movimiento de Afectados por Represas en América Latina), que involucra luchas y experiencias en cada país, crea una unidad en la lucha por los derechos de las poblaciones afectadas, en la construcción del proyecto energético popular y una unidad en torno de acciones contra las empresas que se instalan en los países para acumular lucros, en detrimento de cuestiones sociales, ambientales, culturales y económicas.

Entendemos como urgente y necesaria la construcción de la unidad latinoamericana de los pueblos, alrededor de problemáticas que nos son comunes, pero también apuntar los rumbos hacia la construcción de proyectos de soberanía nacional en cada uno de nuestros países, involucrando al conjunto de los afectados por represas y de la clase trabajadora como un todo en esta construcción.

¡Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular! 🇧🇷

Muchos grupos económicos que patrocinaron el golpe de Estado hoy se están apropiando de las riquezas del pueblo brasileño.

En el caso del agua y la energía eléctrica, el gobierno y los sectores golpistas están intentando privatizar la mayor estatal de energía eléctrica: Eletrobrás. Si esa entrega se concreta, la empresa que gane la concesión tendrá 47 hidroeléctricas y sus respectivos lagos, acceso a los cursos de agua y áreas de monte cercanas a los reservorios, inclusive en la Amazonia.

El lodo tóxico de Samarco, un crimen que se renueva

Movimiento de afectados por Represas de Brasil

Traducción: Rosalinda Hidalgo

Pasados más de 30 meses de la mayor tragedia socioambiental en Brasil, el poder judicial ha actuado de lado de las empresas que originaron el crimen, los gobiernos se dejan manipular y los afectados enfrentan la negligencia, el desprecio y la negación de sus derechos.

Los cerca de 60 millones de m³ de lodos tóxicos de las empresas mineras Vale y de Samarco (Vale y BHP Billiton) derramados en más de 620 km en las corrientes de agua del Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana y agencia del poblado de Linhares, en Espírito Santo, todavía repercuten en la vida de cada uno de los afectados y provocan preocupaciones, pues se desconocen sus impactos para los pobladores de la cuenca del río Doce.

En Mariana las familias todavía esperan los reasentamientos de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo, que la empresa afirma que estarán listos para el 2020. En otras localidades de la zona de rural de Mariana, al menos 60 familias demandan reasentamiento rural por que no es posible vivir en una propiedad afectada por el lodo tóxico. La Fundación Renova, brazo político y publicitario de las empresas mineras, dificulta el avance para la reparación haciendo múltiples reuniones y visitas a la zona afectada que no llegan a nada.

En toda la cuenca, el proceso de indemnización está a cargo del Programa de Indemnización Mediado (PIM), mismo que ha sido controlado por las empresas mineras negando derechos imponiendo reglas fraudulentas: los afectados que vivían a un máximo de mil metros del río Doce son indemnizados con 80,000 pesos mexi-

canos (16 mil reales); para comerciantes la indemnización fue de 6 mil pesos (1200 reales), y para los pescadores la indemnización fue de 800 reales, equivalentes a menos de 4000 pesos mexicanos. El PIM tiene cláusulas ilegales que exigen la confidencialidad de la información y que obligan al afectado a no cobrar en daños futuros asignando un término de liquidación total.

Hay miles de familias que trabajaban en la zona, cuyos ingresos han disminuido por la presencia del lodo, pero esto no se reconoce en los procesos de registro conducidos de forma autoritaria y sin participación real de los afectados. Las propias empresas reconocen que son más de 13 000 pescadores en la cuenca y la mayoría de ellos no tienen acceso a la tarjeta de subsistencia, misma que no es suficiente para resolver ni los problemas de quien ya recibe esta indemnización.

Los cerca de 60 millones de m³ de lodos tóxicos de las mineras Vale y Samarco derramados en más de 620 km en las corrientes de agua del Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana y agencia del poblado de Linhares, en Espírito Santo, repercuten en la vida de cada uno de los afectados y provocan preocupaciones, pues se desconocen sus impactos ambientales y sobre los pobladores de la cuenca del río Doce.



El crimen de Samarco se actualiza todos los días y sus efectos se multiplican.



El proceso de indemnización ha sido controlado por las empresas mineras, que niegan derechos e imponen reglas fraudulentas.

Pasados 36 meses del crimen los problemas con el acceso al agua también se agudizan. Grandes y pequeñas ciudades como Naque, Periquito, Cachoeira Escura (distrito de Belo Oriente), Governador Valadares, Colantina y Linhares enfrentan problemas diarios con el abastecimiento de agua tratada del río Doce. La población no confía en la calidad de los tratamientos y los casos de problemas a la salud se multiplican frente a la inmovilidad y la negligencia del poder público y la negación de la minera Samarco, que intenta invisibilizar el tema. Ni uno de los 30 módulos temáticos del catastro de los afectados trata el tema.

Después de las denuncias presentadas por organizaciones de afectados, exámenes realizados por grupos independientes empiezan a señalar que el lodo es responsable de enfermedades y contaminaciones. En Barra Larga, los exámenes realizados por el Instituto Salud y

Sostenibilidad en 11 personas demostraron la contaminación por níquel en el 100% de las muestras, además de presencia de Zinc y alteraciones significativas por la presencia de arsénico.

El cuerpo de acompañamiento médico presenta los mismos síntomas que aparecen en miles de personas afectadas por el lodo en el río Doce, lo que exige estudios profundos a largo plazo y acción permanente por parte del Estado, por medio del Sistema Único de Salud (SUS), para que las empresas paguen lo provocado por sus vertidos contaminantes, que además de afectar el medio ambiente y los recursos naturales han causado cambios bruscos y profundos en la vida de las familias y, por lo tanto, también son responsables de enfermedades físicas y psicológicas percibidas en toda la cuenca.

Mientras los afectados enfrentan este difícil escenario, las empresas

Samarco, Vale y BHP Billiton encuentran facilidades en el Poder Judicial, como la acción penal paralizada en Vara Federal y Ponte Nova, cerrando acuerdos amistosos con el Tribunal de Justicia de Mina Gerais, incluyendo la contratación de pasantes pagados por Renova y la entrega de estructuras para el tribunal, al mismo tiempo que cancela miles de acciones judiciales legitimando el PIM e impidiendo el acceso a la justicia.

De la misma manera deben firmar un acuerdo con el Ministerio Público Federal y Estadual de MG en el ámbito de las acciones en la 12ª Vara Federal en Belo Horizonte que definirá la forma de "gobernanza" de la reparación. El modelo discutido hasta ahora significará un retroceso en la autonomía conquistada y la entrega completa para dominio de las empresas en la forma de decisión retirando la real posibilidad de participación popular.

Por estos y otros derechos violados no es posible decir que estamos en el post-rompimiento o post-tragedia. El crimen de Samarco se actualiza todos los días y sus efectos se multiplican mientras nuevos problemas son creados por la Fundación Renova, creada únicamente para violar derechos, destruir la autonomía y hacer el derecho mercantil. Contra este proyecto, solo queda la fuerza popular organizada y animada por la solidaridad, la esperanza y la lucha. 🗣️

Río Jaguaribe, sujetos en conflictos y sentidos de la naturaleza en Ceará, Brasil

Anderson Camargo Rodrigues Brito y Claudio Ubiratan Gonçalves

El lugar conocido hoy como Ceará está ubicado en el nordeste del territorio brasileño, con estratégica y prolongada salida al Océano Atlántico. En esa cohesión territorial y discursiva artificialmente moldeada e impuesta por el Estado se encuentra una sociobiodiversidad que ha vivido diversos acontecimientos en siglos recientes, donde prevalece el eco de una sonoridad ancestral de relaciones con la naturaleza en variadas formas de denominar las cosas y relacionarse con ellas.

En la meseta del Araripe, límite sur del estado, los habitantes de las estribaciones acostumbran decir que en las madrugadas se escucha el gemido de la sierra. El transcurrir de las aguas en los nacientes chorros, saltando en las

piedras como ríos-niños que se van juntando con brazos de pequeños riachuelos y forman el Río Jaguaribe, es acogido por esos oídos como una voz. Gemir es típico de quien pasa alguna información, un susurro, un mensaje, de quien revela un dolor. Entonces la naturaleza es tratada por esos nativos, en su dinámica integrada de realización y movimiento, como sujeto que se comunica. Matriz cognitiva distinta del entendimiento racionalista moderno, dualista, que comprende la naturaleza como un instrumento de control, una forma de dominación y extracción.

Esos ecos sonoros, a veces musicales, que no encajan en las partituras con las notas y alfabetos austeros de los límites occidentales, marcan el ritmo del tiempo con las flautas indígenas de los *Irmãos*

Anicetos, banda de música *cabaçal* de la región do Cariri, que, con machetes, cuerdas y palos, teatralizan el cuerpo y tejen sus espectáculos de sus relaciones con las aguas y seres de ese lugar.

El agua en todos los locales del planeta cumple una centralidad en las formas de organización social, espacial y territorial, siendo un instrumento de poder por excelencia. Toda forma de organización social que consiguió subyugar sujetos sociales e imponer relaciones de trabajo, control y de dominación de los cuerpos, precisó controlar antes los ciclos de las aguas. El recurso poético de la metáfora es bien útil para pensar al respecto.

Existen cuerpos prohibidos y autorizados que necesitan ser escondidos o revelados, adaptados para ser

aceptados, invisibilidades u objetivados a la luz del día en esa ceguera contemporánea que apuntó Saramago. Así son los cuerpos de los ríos en ese lugar, así también son los cuerpos de las travestis. Prohibidas, vetadas, violentadas, desautorizadas, represadas como los ríos. Por no encajar en las ropas, notas musicales, alfabetos, dogmas, normas, oraciones. Así fueron tratados los cuerpos y existencias originarias, necesitaron convertirse en ecos para continuar existiendo y desviar de la vigilancia católica y del alto gobierno de los cuerpos. Los ríos no caben en las estructuras de concreto que los visten y, por eso, desobedecen esa rigidez como sujetos, dueño de ese lugar, inundan en sus crecientes, provocan miedo. Cobran su lugar de origen. Son clamados a retornar cuando disminuye su flujo. Ríos sujetos, con voluntades propias.

Esos ecos en amalgama con las propagandas luminosas del progreso y el clamor mesiánico del desarrollo provocan conflictos territoriales que mueven contenidos de clase, género y étnicos en una sociedad que escogió repetir permanentemente el atraso, asentándose en una organización territorial latifundista. Son enfrentamientos estructurales y epistémicos, no ocasionales.

Estructurales porque el acto fundacional del Estado de Ceará, fruto de la expansión territorial lusitana, fue una enorme guerra por el control del río Jaguaribe. Después de siglos de tentativas de penetraciones efectivas y de una geografía política desconocida de articulación étnica por existencias diversas, hizo emerger en el tránsito del siglo XVII para el XVIII uno de los mayores enfrentamientos bélicos por el control colonial de América Latina, la Guerra de los Bárbaros. Garantizando por un lado la posibilidad de expansión de *sesmarias* por parte de la corona portuguesa y la re-existencia de esos otros mundos y matrices de pensamientos en la forma de ecos, trazos, saberes. Por eso son luchas epistémicas. Las comunidades y

pueblos tradicionales como la comunidad *quilombola do Cumbe* en Aracati, indígenas como Almofalas y *Genipapo-Kanindé*, campesinos del Cariri como *Baixo das Palmeiras*, que circundan los afluentes del Jaguaribe, no re-existen solamente para apropiarse de las aguas y sus usos, sino también por la existencia de sus formas de relacionarse y sus conocimientos sobre el río y la naturaleza.

La marcha del progreso y formación del Estado a lo largo de los siglos, reforzó y profundizó ese conflicto-matriz y todas las grandes movilizaciones que ocurrieron en el Estado repercutieron en la tentativa de control del río y la persistencia de los ecos originarios. Las costumbres cotidianas de observar la naturaleza, el movimiento de las hormigas, el canto de los pájaros que indica si habrá invierno o si se podrá plantar son conocimientos y visiones de mundo aprehendidos con ese lugar. Vivir gestando las pocas lluvias, los ríos intermitentes, las largas secas, la reutilización del agua, la construcción de pequeñas barreras con piedras para alargar la permanencia del agua que insiste en fluir y desobedece la rigidez militar de la propiedad privada.

Las transposiciones, grandes represas, centros de investigación meteorológicas, grandes obras de ingeniería son instrumentos de poder impulsados, vendidos como progreso, por un entendimiento de mundo que se sustenta en el conocimiento científico como farol de la verdad para garantizar su ejecución.

Por eso, las luchas por las aguas en Ceará demuestran el vigor de los sujetos que re-existen y la sed insaciable del capital en un continente cada vez más asediado por las grandes corporaciones. Aguas turbias tornadas mercancía que reflejan imágenes distorsionadas de tiempos difíciles, donde se leen las armaduras del capital que buscan aprisionar la naturaleza y las acciones reales de construcción de otros mundos posibles. 🦋



Anderson Camargo R. B. Crato, Baixo das Palmeiras, agosto de 2015.

Las luchas por las aguas en Ceará demuestran el vigor de los sujetos que re-existen y la sed insaciable del capital en un continente cada vez más asediado por las grandes corporaciones. Aguas turbias tornadas mercancía que reflejan imágenes distorsionadas de tiempos difíciles, donde se leen las armaduras del capital que busca aprisionar la naturaleza y las acciones reales de construcción de otros mundos posibles.

La ofensiva **contra** las brasileñas

Maria Júlia Montero Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil

Desde 2016, el mundo mira con ojos preocupados a Brasil. Hace dos años, sufrimos un golpe de Estado, y la derroca de la presidenta Dilma fue el primer paso de muchos en contra de los derechos de las mujeres y de toda la clase trabajadora brasileña.

Para entender qué pasa en Brasil, es necesario partir de una perspectiva que considere las realidades de los países que forman parte de una dinámica del capitalismo globalizado.

Para aplicar sus políticas neoliberales, la burguesía no puede aceptar gobiernos mínimamente progresistas. El golpe en Brasil ocurrió justamente porque, aun-

que con límites, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) tenían una política de distribución de renta, aumento de los derechos y, además, cuestionadora de la hegemonía estadounidense en la región –y las políticas de Michel Temer nunca serían aprobadas en las elecciones.

El avance del golpe es el avance del capital contra el trabajo y el cuerpo de las mujeres, y hoy estos son los temas centrales en la lucha de las brasileñas. El 8 de marzo de 2017, las mujeres iniciaron la lucha contra la reforma de pensiones y jubilaciones, ya que junto a los campesinos serán las más afectadas por ella. Temer quiere igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres –pero sumando el traba-

jo doméstico y el fuera de casa, las mujeres trabajan cerca de 55 horas; los hombres, 50 horas. Dedicamos 21 horas semanales al trabajo doméstico; los hombres, 10 horas. Trabajamos más, somos mayoría en el trabajo precarizado, informal y ganamos menos. Nada más justo que una jubilación antes.

La reforma laboral –aprobada en 2017– establece que mujeres embarazadas podrán trabajar en ambientes hoy considerados insalubres, un aumento de la jornada laboral, la fragmentación de las vacaciones, disminución del horario de almuerzo, aumento del trabajo de tipo parcial y temporal –en el que las mujeres son mayoría. Eso significa que las condiciones del trabajo de las mujeres están peores



8 de marzo de 2017, batucada feminista.

FOTO: Jornalistas Livres

que antes – y, si logran aprobar la reforma de la jubilación, trabajaremos así hasta los 65 años.

Estos fueron temas que se masificaron entre las mujeres, principalmente la reforma de las pensiones y jubilaciones. La Marcha Mundial de las Mujeres hizo una intensa campaña para movilizar a las mujeres para el 8 de marzo, y resultó que tuvimos las mayores manifestaciones desde hace años. Fueron innumerables reuniones y momentos de formación para trabajar el tema y organizar a las mujeres para este enfrentamiento. Logramos repetir este hecho en 2018, llevando a las calles nuestras reivindicaciones por condiciones dignas de trabajo y jubilación para las mujeres.

La Propuesta de Enmienda Constitucional 241, o *PEC de la muerte*, congela las inversiones en salud y educación por 20 años a partir de 2018. Eso significará más trabajo para las mujeres, ya que irán “sustituir” esos servicios públicos cuidando de los enfermos y de los niños (por la falta de guarderías).

Como hemos dicho, está en marcha una ofensiva ideológica que afirma el hogar y la maternidad como naturales de las mujeres. Esas ideas sirven para justificar la marginalización de la mujer del mercado laboral (con despidos, menores sueldos, precarización del trabajo) y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados causada por la falta de servicios públicos.

A eso se unen las ofensivas contra la legalización del aborto, con propuestas para aumentar su criminalización en Brasil y amenazas a las

feministas. Inspiradas por las argentinas, retomamos la construcción del Frente Nacional Contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto, con reuniones y manifestaciones por todo Brasil. Además, el día 8 de agosto nos juntamos a nuestras hermanas argentinas en su lucha por la legalización del aborto.

Además del control de nuestras capacidades reproductivas, controlan nuestros cuerpos también a través de la violencia. En 2017, Temer recortó 61% del presupuesto para el combate a la violencia sexista. Ya estamos viendo un crecimiento de este tipo de violencia, con la paralización de los procesos de juicio de los agresores y de atendimento a las mujeres.

Entre algunas de las principales lecciones de la resistencia en Brasil hoy están la necesidad de hacernos una lucha feminista antisistémica, esto es, antirracista y anticapitalista. Si no luchamos contra el golpe y sus ataques a la clase trabajadora, tampoco podremos luchar por nuestros derechos; también está la necesidad de construir un movimiento feminista de masas, enraizado en todo el país; por fin, la necesidad de construir una lucha internacionalista, conectando las diferentes formas de resistencia de las mujeres en toda América Latina y construyendo la unidad entre las diversas organizaciones en nuestro continente.

El ataque del capital es contra todos los pueblos, y solamente unidos podremos hacerle frente y erigir una nueva sociedad, basada no en las necesidades del mercado, sino en las necesidades de los pueblos. 🗨️



Hoy la lucha feminista es antisistémica, es decir, antirracista y anticapitalista.

FOTO: Bruna Provazi



Manifestaciones masivas de mujeres contra el golpe parlamentario de Estado.

FOTO: Bruna Provazi

La reforma laboral establece que mujeres embarazadas podrán trabajar en ambientes hoy considerados insalubres, un aumento de la jornada laboral, la fragmentación de las vacaciones, disminución del horario de almuerzo, aumento del trabajo de tipo parcial y temporal, en el que las mujeres somos mayoría.